

# Alternativas de encarcelamiento

## Anexo 1.

### Tabla de contenido

<b>Anexo 1.</b> ....	<b>1</b>
<b>Alternativas pre- procesales</b> .....	<b>3</b>
1. Despenalización y comisiones de disuasión – Portugal .....	3
2. Despenalización – República Checa .....	5
3. Programas de desvío policial – Australia.....	7
4. Políticas de derivación para posesión de cannabis.....	9
5. LEAD .....	10
6. TAD .....	12
7. SAM.....	14
8. Cook County – SADAM.....	15
9. Drug Market Intervention .....	17
10. 24/7 .....	20
11. Rapid intervention Community Court.....	22
<b>Alternativas procesales</b> .....	<b>24</b>
12. Programa de tratamiento bajo supervisión judicial – Costa Rica .....	24
13. Hope.....	27
14. Tribunal de Tratamiento de Drogas- Chile.....	29
15. Tribunal de Tratamiento de Drogas –Salta .....	30
19. Directrices de Inglaterra y Gales.....	32
<b>Alternativas post- procesales</b> .....	<b>34</b>
17. Retained Jurisdiction Hybrid Model.....	34
18. Right Living House.....	35
19. Community Service Order.....	36
20. Community Courts .....	38
21. Amnistía Masiva .....	40
22. Indulto de Bolivia.....	42
23. Indulto Ecuador .....	44
24. Reducción y sustitución de Sentencias –España .....	46
25. Tratamiento para personas condenadas.....	48
26. Drug Treatment Alternative to Prison.....	50
<b>Alternativas posibles desde antes del proceso hasta después de la sentencia</b> .....	<b>52</b>
27. Restorative Justice Panels (RJP).....	52
28. Persecución diferenciada.....	54
<b>Alternativas por perfiles particulares y poblaciones específicas</b> .....	<b>56</b>
29. Back on Track .....	56
30. Conviction and Sentence Alternatives.....	58
31. Reforma artículo 77 para mujeres .....	59
32. Aboriginal Restorative Justice Project .....	61
<b>Algunas alternativas generales de Africa y América Latina</b> .....	<b>62</b>

<b>33. Servicios comunitarios Uganda .....</b>	<b>62</b>
<b>34. Libertad condicionaly servicios comunitarios- Tanzania .....</b>	<b>64</b>
<b>35. Libertad condicional - Kenya.....</b>	<b>66</b>
<b>36. Condena condicional - Argentina .....</b>	<b>68</b>
<b>37. Medida de seguridad curativa .....</b>	<b>70</b>
<b>38. Casa de salud con Inclusión Social (SIS) .....</b>	<b>72</b>
<b>39. Medida de seguridad educativa.....</b>	<b>72</b>

## Alternativas pre- procesales

### 1. Despenalización y comisiones de disuasión – Portugal

<b>Despenalización y comisiones de disuasión</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Portugal Nivel nacional
<b>Tipo de alternativa</b>	Pre procesal Despenaliza por ley e implementa por política pública
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	Despenaliza la posesión de todas las drogas y desarrolla una respuesta administrativa para esa conducta. Los potenciales beneficiarios son todas las personas sorprendidas en posesión de drogas.
<b>Descripción general</b>	<p>Junto a la despenalización se crean Comisiones de Disuasión, para que apliquen las sanciones administrativas. Hay 18 en el país, una por cada provincia del país y dependen del Ministerio de Salud, aunque son interdisciplinarias. Están conformadas por tres integrantes seleccionados por los Ministerios de Salud y de Justicia.</p> <p>Cuando una persona es encontrada en posesión de una cantidad de sustancias psicoactivas inferior a la cantidad correspondiente a diez días de uso personal, la droga es decomisada y la persona es citada para presentarse ante una Comisión. En caso de que supere este umbral, la conducta entra en el ámbito penal.</p> <p>En la comparecencia, los integrantes de la Comisión dialogan con el usuario o la usuaria sobre su historia de consumo, en aras de identificar si se trata de un consumo ocasional o problemático y poder ofrecer una respuesta individualizada. Normalmente la primera comparecencia conlleva la suspensión del procedimiento y no se emite sanción alguna.</p> <p>Las Comisiones pueden imponer una medida administrativa, por ejemplo suspensión de la licencia de conducir, prohibición de acudir a determinados lugares, trabajo comunitario y multa, entre otras. Por ley no se puede imponer una multa a una persona dependiente, pues con ello se le podría forzar a cometer un delito para obtener el dinero para pagarla.</p> <p>En el año 2009, el 68 por ciento de los casos tratados por las Comisiones de Disuasión eran usuarios no dependientes y no se aplicó ninguna sanción. En un 15 por ciento de los casos se acordó que la persona acudiría a tratamiento. Alrededor del 14 por ciento recibieron una medida administrativa: un 4 por ciento multas y un 10 por ciento sanciones no pecuniarias.</p> <p>El 76 por ciento de los casos eran por posesión de cannabis, el 11 por ciento heroína, el 6 por ciento cocaína y el 6 por ciento poli-</p>

	consumo.
--	----------

## 2. Despenalización – República Checa

<b>Despenalización y sanciones administrativas para posesión</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	República Checa. Implementada a nivel Nacional.
<b>Tipo de alternativa</b>	- Pre procesal. - Reforma legislativa aprobada el 14 de diciembre de 2009. Vigente a partir del 1° de enero de 2010.
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	- Establecer umbrales de posesión máximos no sancionables con prisión coherentes con el funcionamiento de los mercados como un instrumento para replantear una política de criminalización, cuyas evaluaciones mostraban que: i) no había logrado reducir la disponibilidad de drogas, ii) el consumo en el país estaba aumentando y iii) los costos sociales del uso de sustancias ilícitas estaban creciendo significativamente. - Los beneficiarios de la reforma fueron todos los usuarios de drogas y cultivadores para consumo personal.
<b>Descripción general</b>	<p>- Con la nueva ley se establecieron unas cantidades consideradas “de nivel mínimo, definidas a partir de una evaluación de los modelos de consumo para asegurar que las cantidades fueran estimadas adecuadamente. Las cantidades definidas fueron: hasta 15 gr de cannabis, 1 gr de cocaína, 1.5 gr de heroína, 5 gr de hachís, 5 lengüetas de papel u otras presentaciones de LSD, 4 pastillas de éxtasis o 40 piezas de hongos alucinógenos”.</p> <p>Una persona encontrada en posesión de una de estas drogas en cantidad igual o menor a las establecidas en la tabla es considerada responsable de una infracción menor y será castigada con una multa de hasta 550 euros (756 dólares americanos), procesada a través del sistema administrativo municipal. Esta sanción no conlleva antecedentes penales. También se estableció una sanción con multa para el cultivo de cannabis para consumo personal.</p> <p>En los casos de posesión para el consumo en cantidades superiores a las establecidas en la tabla se procederá penalmente y, por lo general, se establecerá una sanción alternativa a la prisión</p> <p>- La participación de la sociedad civil ha sido fundamental así como la cooperación de las fuerzas policiales. Estos elementos deben tomarse en cuenta, puesto que si bien la despenalización de la posesión e incluso del cultivo para uso personal están técnicamente a la mano de todos los países, no se necesita solamente de un cambio legislativo – de por sí complejo de obtener – sino un clima cultural y social proclive al cambio y de la voluntad política necesaria para implementar las reformas.</p>

<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p><i>Silenciosa: políticas en práctica para la descriminalización de las drogas en todo el mundo</i>, <a href="http://idpc.net/es/publications/2012/07/una-revolucion-silenciosa-politicas-en-practica-para-la-descriminalizacion-de-las-drogas-en-todo-el-mundo">http://idpc.net/es/publications/2012/07/una-revolucion-silenciosa-politicas-en-practica-para-la-descriminalizacion-de-las-drogas-en-todo-el-mundo</a></p> <p>EMCDDA, Czech Republic: drug-related information and data, <a href="http://www.emcdda.europa.eu/countries/czech-republic">http://www.emcdda.europa.eu/countries/czech-republic</a></p> <p>Csete, J. (2012), <i>Un acto de equilibrio. La gestión de políticas sobre Drogas ilícitas en la República Checa</i> (Nueva York: Open Society Foundations)</p>
--------------------------------------	--

### 3. Programas de desvío policial – Australia

<b>Nombre completo de la experiencia</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Australia, South Australia 2001
<b>Tipo de alternativa</b>	Pre procesal Programa
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	-Ofrecer incentivos tempranos a las personas para resolver su uso de drogas, para lo cual los canaliza a programas de educación, valoración y tratamiento. -Reducir el número de personas que comparecen ante el tribunal por la posesión de pequeñas cantidades y reducir la reincidencia. Es un programa de desvío policial orientado a infractores primarios o con reincidencia encontrados en posesión de cannabis u otras drogas
<b>Descripción general</b>	Cada estado de Australia tiene al menos un programa de desvío policial. El de South Australia, que es al que se refiere esta ficha se caracteriza por los siguientes elementos:  -Al momento de la detención la policía contacto la Drug Diversion Line (línea telefónica que opera 24 horas, 7 días a la semana) y toma una cita para que la persona se someta a una valoración de un trabajador acreditado del sector salud en su área local. La remisión a este programa es obligatoria y no discrecional de la policía. Si la persona acude a la cita y participa en la valoración, no se siguen otras acciones. En la valoración se determina si es necesario canalizarlo a otros servicios o a tratamiento. Las personas adultas derivadas por más de tres ocasiones, son recibidas por un panel en su cuarta derivación y en las subsecuentes.  - El programa es supervisado por el Police drug Diversion Initiative State Reference Group , el cual incluye representantes de los departamentos de salud, educación, justicia de adolescentes, entre otros.  Una evaluación del programa en 2008 arroja los siguientes resultados principales: - Entre 2001 y 2005 el 85.2% de las personas detectadas habían sido desviadas en una sola ocasión; el 79.5% del total de las personas capturadas por el programa eran hombres, y el 59.1% tenían 17 años o menos. 6.9% del total eran indígenas. El 80% de las personas referidas completaron con éxito el programa.
<b>Bibliografía relevante</b>	O'Brien, Bev "Police Drug Diversion Initiative Final Evaluation Report", 2008, <a href="http://www.ocsar.sa.gov.au/docs/evaluation_reports/PDDIFinalEvaluation">http://www.ocsar.sa.gov.au/docs/evaluation_reports/PDDIFinalEvaluation</a>



<p><u>Report2008.pdf</u> Payne, Jason (et. al.), "Police drug diversion: a study of criminal offending outcomes", 2008, <a href="http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rpp/81-99/rpp97.html">http://www.aic.gov.au/publications/current%20series/rpp/81-99/rpp97.html</a>.</p>
--

#### 4. Políticas de derivación para posesión de cannabis

<b>Políticas de derivación para posesión de cannabis</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Inglaterra y Gales Nivel nacional
<b>Tipo de alternativa</b>	Pre procesal
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	- Evitar el tratamiento penal para consumidores - Personas encontradas en posesión o haciendo uso de cannabis <sup>1</sup>
<b>Descripción general</b>	<p>- En cuanto a la posesión de pequeñas cantidades de cannabis, el Reino Unido ha adoptado un sistema de sanciones escalonadas, con sanciones más y más severas según el nivel de reincidencia:</p> <p>Primera detención: El cannabis será confiscado por la policía. Si la persona tiene 18 años o más recibirá una amonestación verbal (<i>cannais warning</i>). Si tiene menos de 18 años recibirá una reprimenda y un referente adulto será contactado.</p> <p>Segunda detención: Una persona de 18 años o más probablemente recibirá una multa (Penalty Notice for Disorder –PNC-) de 80 libras esterlinas (135 dólares americanos). Ésta será registrada en el sistema nacional de la policía. Una persona menor de 18 años recibirá una amonestación final y será canalizada al equipo de ofensas juveniles (Youth Offending Team).</p> <p>Tercera detención: En esta ocasión es probable que la persona sea arrestada. Las sentencias más aplicadas son multas y community orders.</p>

<sup>1</sup> El cannabis es catalogado como Droga de clase B. Las penas previstas (Guidelines for Drug Offences) por posesión de drogas de clase B se encuentran en el siguiente rango: Dimisión (en inglés: discharge) a 26 semanas de prisión.

## 5. LEAD

<b>Law Enforcement Assisted Diversion (LEAD)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	United States. Seattle (King County), Washington and Santa Fe, New Mexico
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre procesal. Prior to entering the judicial system – police diversion program.</li> <li>- LEAD was created as an independent program through a six month planning process involving law enforcement, public defenders, prosecutors, treatment providers, neighborhood leaders and elected officials.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The main objective is to offer a viable alternative to arrest/prosecution for low-level offenses relating to drugs.</li> <li>- The target population is individuals with “substance use disorders” – users who appear to be problematic. It exclusively targets individuals arrested for low level drug offenses and prostitution (who meet the eligibility criteria.)</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The program was designed specifically to be a pilot project subject to a systemic outcome evaluation. To generate a comparison group, certain days and times were designated as open and closed for LEAD referrals. When an eligible individual (possession amount is less than 3 grams, “appears amenable to diversion and social service intervention,” is not involved in dealing for profit above a subsistence income, does not appear to exploit minor, is not suspected of promoting prostitution, or does not have a serious or violent criminal history) is arrested for a low level drug offense (possession or minor sale) or prostitution in a particular area (Belltown in Seattle) the arresting officer could choose to refer the individual to LEAD. Officers can also refer people to LEAD through “social contact referrals” with individuals who have prior documented involvement in drugs or prostitution. A LEAD case manager conducts a screening with the referred client and the officer releases custody of the individual. If the individual complies with the screening and assessment, they are not charged. Case managers are very hands on, develop individualized treatment plans and are focused on “harm reduction.”</li> <li>- There are currently no measured results of the program. It is undergoing a rigorous evaluation process. Expected outcomes include: reduced recidivism, decreased demand for social services, improved police/community relations, decreased costs and freed resources. LEAD’s success was in large part due to the fact that police initiated the program. The frustration that officers felt dealing with the same individuals cycling through the system</li> </ul>

	<p>compelled them to find a new solution. The collaboration that followed and the private foundation funding were also instrumental.</p>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initial Evaluation. Katherine Beckett, Ph.D. at University of Washington. March, 2014. Seattle’s Law Enforcement Assisted Diversion Program: Lessons Learned from the First Two Years. <a href="http://leadkingcounty.org/storage/2014-Lead-Process-Evaluation.pdf">http://leadkingcounty.org/storage/2014-Lead-Process-Evaluation.pdf</a></li> <li>- Dedicated Website - <a href="http://leadkingcounty.org/">http://leadkingcounty.org/</a></li> </ul>

## 6. TAD

<b>Treatment Alternatives and Diversion (TAD)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	USA. State of Wisconsin, Cities of Milwaukee, Washington, Dane Counties.
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TAD Milwaukee use pre-charge diversion and deferred prosecution (several other jurisdictions in Wisconsin use TAD funding for drug court programs.)</li> <li>- Funding program created through the collaboration of various Wisconsin agencies in response to Wisconsin Act 25&amp;90m.19.964 which provided funding for “alternatives to prosecution and incarceration for criminal offenders who abuse alcohol or other drugs.”</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The main objective of the program is to provide treatment and diversion alternatives for non-violent offenders with drug and alcohol problems.</li> <li>- The alternative is for individuals who abuse alcohol or other drugs – problematic users.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Defendants are referred by diversion specialists who staff the central intake section of the prosecutor’s office or through defense attorneys and reviewing prosecutors. After eligibility is determined, prosecutors can offer diversion or deferred prosecution with specific conditions of participation (drug testing, treatment, employment, community service, etc.) Participants are then provided a case manager by a private social services agency (in Milwaukee, Justice 2000). The case manager develops a program with the participant and connects them to a variety of resources including treatment, education, housing, employment, etc. In deferred prosecution cases, compliance is reported at every scheduled court hearing while in diversion cases, regular status reports are provided to the reviewing prosecutor. In pre-charging diversion cases, defendants who participate in treatment services avoid having their charges filed for their arresting offense. In deferred prosecution cases, successful completion of program requirements leads to dismissal or reduction of charges. If participants do not complete the program or fail to comply, they are charged or sentenced.</li> <li>- The graduation rate for TAD diversion projects is reported to be 64%. According to an evaluation by the University of Wisconsin, the diversion projects yield \$2.08 in benefits for every \$1.00 invested. Unfortunately, most of the research on TAD does not distinguish between data from the diversion programs and data from the drug court programs.</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TAD Pamphlet. December 2011. Advancing Effective Diversion in Wisconsin. <a href="http://uwphi.pophealth.wisc.edu/about/staff/van-stelle-kit/tad-2011-">http://uwphi.pophealth.wisc.edu/about/staff/van-stelle-kit/tad-2011-</a></li> </ul>

	<p>evaluation-report-brief-summary.pdf - Annual 2007 Evaluation Report. Patrick Remington (MD), D. Paul Moberg (PhD) and David Kindig (PhD) of the University of Wisconsin Population Health Institute. <a href="http://uwphi.pophealth.wisc.edu/about/staff/">http://uwphi.pophealth.wisc.edu/about/staff/</a></p>
--	---

## 7. SAM

<b>Small Amount of Marijuana (SAM) Program - USA</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Philadelphia, Kings County (Brooklyn) (2010)
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre Procesal (SAM is a prosecutor-led diversion program)</li> <li>- Programa administrativo: SAM was a program initiated several month Philadelphia District Attorney took office.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Main objective: To treat possession of marijuana as a summary offense rather than a misdemeanor.</p> <p>Target population: marijuana users (charged with possession)</p>
<b>Descripción general</b>	<p>SAM gives prosecutorial discretion to charge individuals with a summary offense rather than a misdemeanor. A fine and classes rather replacing probation, jail time or a hefty fine.</p> <p>Before SAM was implemented, individuals charged with possession of up to 30 grams of marijuana could receive up to 30 days of probation and jail as well as a \$500 fine. Defendants who were found guilty were also left with a permanent criminal record. SAM changed prosecutor policy to treat minor marijuana charges as a summary offense –offenders have to pay \$200 for a three-hour class on drug abuse and they have no criminal record.</p> <p>Results:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The Philadelphia DA’s office that has saved an estimated \$2 million a year from diverting thousands of marijuana cases.</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	<p>Memo. Kings County District Attorney (Brooklyn).</p> <p><a href="http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/09/nyregion/09POTDAmemo.html">http://www.nytimes.com/interactive/2014/07/09/nyregion/09POTDAmemo.html</a></p>

## 8. Cook County – SADAM

<b>Ficha resumen (15) - Cook County Drug School Deferred Prosecution Program</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	United States. State of Illinois. Cook Country and St. Clair County
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre Procesal. Drug School is a pre-adjudication diversion program during the investigation and trial stage.</li> <li>- The Cook County State’s Attorney office in Chicago created the drug school program without specific legislative authorization. In 2008, the Illinois General Assembly passed the Drug School Act to establish a drug school program for nonviolent drug offenders statewide modeled after the Cook County State’s Attorney drug school program.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Main Objective: To divert drug cases involving small amounts of narcotics into educational programming on the harmful impact of drugs on individuals, families and communities.</li> <li>- Drug School targets individuals with a very limited criminal record who are drug offenders (misdemeanor or felony possession or paraphernalia charge). Individuals charged with any level of trafficking or manufacture are ineligible. Defendants can only participate in the program one time (recently changed to possibility of readmission after three years with no new arrests).</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Defendants charged with drug crimes who have a very limited criminal history or are first time offenders are identified at preliminary hearing. The determination of whether to offer participation in the program is within the sole discretion of the State’s Attorney’s Office. Defenders chosen to participate avoid trial, agree to the programs rules and are required to attend 10 hours of classes addressing the negative aspects of drugs. Participants must attend all classes and not be under the influence of any substance. If participants comply, their cases are dropped and they are eligible to apply for expungement of the case from their criminal record.</li> <li>- As reported by the provider in charge of program logistics and reporting, 80-90 percent of registering defendants graduate. Of those who graduate, 83 percent have no arrests for drug crimes in the 3 years after completing the program. Relative ease of implementation from an administrative point of view.</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memo. Anita Alvarez (State’s Attorney). State’s Attorney’s Drug School. <a href="http://www.metropolisstrategies.org/documents/MarkKammerer-MemoHandoutsCombined.pdf">http://www.metropolisstrategies.org/documents/MarkKammerer-MemoHandoutsCombined.pdf</a></li> <li>- Statute. Illinois General Assembly. COUNTIES 55 ILCS 130/ Drug School Act.</li> </ul>



	<a href="http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2910&amp;ChapterID=12">http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2910&amp;ChapterID=12</a>
--	---

## 9. Drug Market Intervention

<b>Drug Market Intervention</b>	
<b>Lugar implementación</b>	United States. High Point, North Carolina; Providence, Rhode Island; Nashville, Tennessee; Rockford, Illinois; Rochester, New York.
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre procesal y Procesal. This intervention takes place prior to offenders entering the judicial system and/or during the investigation.</li> <li>- Police and community program to deal with the problems generated by drug markets.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DMI aims to eliminate a targeted overt drug market by focusing intervention on active drug dealers.</li> <li>- DMI is primarily targeted at low-level drug dealers without a history of violent offending.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<p>- The first step involves law enforcement, community members, and social service providers forming a partnership to carry out DMI. Under the strategy, the police identify a particular drug market, arrest violent dealers, and notify nonviolent dealers to attend a call-in, a meeting in which they come face-to-face with law enforcement officers, social service providers, community figures, ex-offenders, and “influentials”—parents, relatives, and others with whom they have close, important relationships. The partnership tells the dealers that they are valuable to the community but that the dealing must stop. The police also inform them that local law enforcement has developed cases on them but that these cases will be “banked” (i.e., temporarily suspended). The partnership then gives them an ultimatum: If they continue to deal, the police will activate the banked cases against them. Finally, social service representatives explain that they are making special help available to dealers to help them change their lives</p> <p>- A wide variety of communities has implemented DMI with the following results:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In High Point, North Carolina, the West End, which was the first neighborhood to test DMI in 2004, has seen a sustained reduction in violent crime. Formal evaluations have shown violent crime reductions ranging between 12 to 18 percent<sup>2</sup> and 44 to 56<sup>3</sup> percent in targeted areas relative to nontargeted areas. However, studies that found lesser degrees of sustained violence reductions over time did not assess the core issue</li> </ul>

<sup>2</sup> Corsaro, N., Hunt, E. D., Hipple, N. K., McGarrell, E. F., “The Impact of Drug Market Pulling Levers Policing on Neighborhood Violence: An Evaluation of the High Point Drug Market Intervention,” *Criminology and Public Policy*, Vol. 11, Issue 2, DOI:10.1111/j.1745- 9133.2012.00798.x.

<sup>3</sup> Graves, K., Chiu, K., Di Luca, K. L., Shelton, T. L., Frabutt, J. M., Weil, J., Ireland, A. and Hunt, E. D. "Officially Off the Market: Evaluation of a Pulling Levers Approach to Eliminating Open-Air Drug Markets in High Point, North Carolina," *Paper presented at the annual meeting of the ASC Annual Meeting, San Francisco Marriott, San Francisco, California, 14-01-05* from [http://citation.allacademic.com/meta/p431067\\_index.html](http://citation.allacademic.com/meta/p431067_index.html).

	<p>and central objective of DMI: the disappearance of the overt markets in High Point. Subsequent operations in High Point have eliminated additional street markets.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ After a DMI in East Nashville, Tennessee, drug and narcotic offenses declined by 55.5 percent, drug equipment violations by 36.8 percent, and calls for service by 18.1 percent.</li> <li>▪ In the worst drug market of Providence, Rhode Island, calls for police service decreased 58 percent, reported drug crime 70 percent, and drug calls to police 81 percent. The market was shut down from the moment of the call-in with no sign of displacement.</li> <li>▪ In Hempstead, New York, drug arrests in the target area averaged 150 per year. After a call-in in 2008, drug arrests fell 87 percent in 2008 and continued to decline into single digits in 2009.</li> <li>▪ In Rockford, Illinois, a post-DMI evaluation found a 31 percent decrease in property crime and a 15 percent reduction in violent crime in the target area, compared to a 6 percent decline in both property and violent crime citywide. Community members reported a dramatic improvement in quality of life.</li> </ul> <p>Results such as these are common, but they hinge on a community's ability to do the work well. Other cities have seen DMI fail to produce results when the strategy was implemented poorly.</p>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Best, Mary. 2009. "Model Police Work." <i>UNCG Research</i> (7): 8–15.</li> <li>- Corsaro, Nicholas, E.D. Hunt, N.K. Hipple, and E.F. McGarrell. 2012. "The Impact of Drug Market Pulling Levers Policing on Neighborhood Violence." <i>Criminology &amp; Public Policy</i> 11 (2).</li> <li>- Corsaro, Nicholas, Rod K. Brunson, and Edmund F. McGarrell. 2009. "Problem-Oriented Policing and Open-Air Drug Markets: Examining the Rockford Pulling Levers Deterrence Strategy." <i>Crime &amp; Delinquency</i>. doi:10.1177/0011128709345955.</li> <li>- Corsaro, Nicholas, and Edmund F. McGarrell. 2009. "An Evaluation of the Nashville Drug Market Initiative (DMI) Pulling Levers Strategy." Lansing, MA: Michigan State University. <a href="http://www.nnscommunities.org/NashvilleEvaluation.pdf">www.nnscommunities.org/NashvilleEvaluation.pdf</a>.</li> <li>- Frabutt, J.M., M.K. Hefner, L.K. Harvey, K.L. Di Luca, and T.L. Shelton. Forthcoming. "Key Community Stakeholders in a Police-Community Partnership to Eliminate Street-Drug Markets: Roles, Engagement, and Assessment of the Strategy." <i>Crime, Punishment, and the Law: An International Journal</i>.</li> <li>- Frabutt, J. M., M.K. Hefner, K.L. Di Luca, T.L. Shelton, and L.K. Harvey. 2010. "A Street-Drug Elimination Initiative: The Law Enforcement Perspective." <i>Policing: An International Journal of Police Strategies and Management</i> 33 (3): 452–472.</li> <li>- High Point Police Department. 2011. <i>Drug Market Intervention: The West End Initiative, High Point, North Carolina</i>. New York: National</li> </ul>

	<p>Network for Safe Communities.  <a href="http://www.nnscommunities.org/high_point_dmi_ppt.pdf">www.nnscommunities.org/high_point_dmi_ppt.pdf</a>.</p> <p>- Hipple, Natalie K., and Edmund F. McGarrell. 2009. "Bureau of Justice Assistance Drug Market Intervention Implementation Guide and Lessons Learned." Washington, DC: Bureau of Justice Assistance. <a href="http://www.nnscommunities.org/DMI-LessonsLearned2-1-2010.pdf">www.nnscommunities.org/DMI-LessonsLearned2-1-2010.pdf</a>.</p> <p>- Hipple, Natalie K., Nicholas Corsaro, and Edmund F. McGarrell. 2010. "The High Point Drug Market Initiative: A Process and Impact Assessment." East Lansing, MI: Michigan State University. <a href="http://drugmarketinitiative.msu.edu/HighPointMSUEvaluationPSN12.pdf">http://drugmarketinitiative.msu.edu/HighPointMSUEvaluationPSN12.pdf</a>.</p> <p>- Kennedy, David. 2009. "Drugs, Race and Common Ground: Reflections on the High Point Intervention." <i>National Institute of Justice Journal</i> 262 (March).</p> <p>- Kennedy, David. 2008. "Applications I: Eliminating Overt Drug Markets: The 'High Point' Strategy." Chap. 9 in <i>Deterrence and Crime Prevention: Reconsidering the Prospect of Sanction</i>, 142. New York: Routledge.</p> <p>- Kennedy, David M. 2008. <i>Deterrence and Crime Prevention: Reconsidering the Prospect of Sanction</i>. New York: Routledge.</p> <p>- Kennedy, David M., and Sue-Lin Wong. 2009. <i>The High Point Drug Market Intervention Strategy</i>. Washington: U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services. <a href="http://ric-zai-inc.com/ric.php?page=detail&amp;id=COPS-P166">http://ric-zai-inc.com/ric.php?page=detail&amp;id=COPS-P166</a>.</p> <p>- McGarrell, Edmund F., Nicholas Corsaro, and Ron K. Brunson. 2010. "The Drug Market Intervention Approach to Overt Drug Markets." <i>VARSTVOSLOVJE, Journal of Criminal Justice and Security</i> 12 (4): 397–407.</p> <p>- Meares, Tracey. 2009. "The Legitimacy of Police among Young African- American Men." <i>Marquette Law Review</i> 92 (4): 651–666.</p> <p>- Sampson, R.J., and D.J. Bartusch. 1998. "Legal Cynicism and (Subcultural?) Tolerance of Deviance: The Neighborhood Context of Racial Differences." <i>Law and Society Review</i> 32 (4): 777–804.</p>
--	---

10. 24/7

<b>24/7 Sobriety Project</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	EEUU: South Dakota, North Dakota, Montana (Desde 2005)
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre procesal</li> <li>- Medida administrativa del "Attorney General" autorizada por la Legislatura del Estado.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Objetivo: Reducir el número de ofensas relacionadas con conducir bajo efectos del alcohol o drogas y su alta tasa de reincidencia.</p> <p>Beneficiarios: Cualquier tipo de usuario de alcohol o drogas que haya cometido una ofensa de tránsito bajo los efectos de dichas sustancias. También procede como condición de la libertad condicional para otros delitos como la violencia doméstica, asalto, entre otros.</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Para asegurar la sobriedad del ofensor (durante 24 horas al día, 7 días a la semana) se acude a dos mecanismos: i) evaluación y monitoreo continuo, y ii) sanciones menores pero certeras y cambiantes.</p> <p>La evaluación y monitoreo de la sobriedad del ofensor es ordenada por un juez o un oficial de libertad condicional, y se realiza a través de diferentes mecanismos como las pruebas respiratorias de alcoholemia (dos veces al día), brazaletes de tobillo, parches, y pruebas de orina. En caso de encontrar que el ofensor consumió alcohol o drogas, es detenido y llevado ante la Corte, quien impone una medida de encarcelamiento que durara una o dos noches la primera vez, pero que va aumentando cada vez que la persona consume alcohol o drogas. En todo caso, la sanción se aplica de manera rápida y con toda certeza (lo que genera más impacto en la persona y una mayor necesidad de cumplir con las evaluaciones)</p> <p>El ofensor termina su programa por decisión de la Corte o del oficial de libertad condicional.</p> <p>Resultados (a partir de estudio econométrico de RAND en 2013 con datos de 2005-2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No hubo cambios en el número de casos de conducción bajo los efectos del alcohol cuando se hace por primera vez (pues el programa se centra en reincidentes).</li> <li>- Hubo una reducción del 12% en el número de detenciones por conductores bajo efectos del alcohol reincidentes</li> <li>- Hubo una reducción del 9 % en los arrestos por violencia doméstica.</li> <li>- Hubo una modesta reducción de los accidentes de tránsito de conductores hombres entre los 18 y 40 años de edad</li> <li>- Al final de 2010, más de 17.000 residentes de Dakota del Sur (cuya población es de 825.000) participaron en el programa</li> </ul>

	24/7.
<b>Bibliografía relevante</b>	<p>- Kilmer, B. <i>et al.</i> (2013). "Efficacy of frequent monitoring with swift, certain and modest sanctions for violations: Insights from South's Dakota 24/7 Sobriety Project". American Journal of Public Health, Vol. 103, No. 1 Disponible en: <a href="http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2012.300989">http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2012.300989</a></p> <p>- Página web oficial del programa 24/7 de Dakota del Sur: <a href="http://apps.sd.gov/atg/dui247/">http://apps.sd.gov/atg/dui247/</a></p>

## 11. Rapid intervention Community Court

<b>Rapid Intervention Community Court (RICC)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	United States. State of Vermont. Chittenden Country. Recently launched in Addison, Lamoille, Rutland, and Franklin counties in Vermont.
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre Procesal. Prosecutor-led diversion program. It is not a court, however it has since evolved with some diversion occurring at the post-charge, pre-adjudication stage with a specially assigned judge.</li> <li>- RICC is an intervention led by the Chittenden County State’s Attorney’s Office (CCSA). CCSA collaborates with the Burlington Police Department, the Burlington Community Justice Center and other service providers to run the program.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The main objective is “to hold individuals accountable by addressing the root cause of their criminal behavior.”</li> <li>- RICC’s target population is repeat offenders whose crimes are assessed to be driven by untreated addiction or mental illness. Their intervention is for problematic users (charged with possession) and those who commit nonviolent crimes relating to problematic use.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The citing law enforcement officer (prosecutor or police) may direct the accused to contact RICC or the RICC community coordinator can access the law enforcement databases to select eligible participants. There is a robust initial intake process that uses the Ohio Risk Assessment System to determine eligibility as well as inform treatment decisions. Participants must complete all proposed treatment plans within 90 days as well as comply with regular check ins. After completing their plan and complying with program requirements, their charge is dismissed. There was no information available as to whether all participants who comply are sentenced or whether there are opportunities to re-enroll. The commitment and capacity of one office (CCSA) was crucial to the success of RICC. Finally the focus on successful treatment and finding a mechanism to provide it as soon as possible (pre-charge referrals) is key to their results.</li> <li>- According to a 2011 Outcome Evaluation of RICC, it “appears to be a promising approach for reducing recidivism.” Only 7.4% of successful participants were reconvicted of a crime after completing the program. The recidivism rate in Vermont is over 40% and 25.4% for participants of RICC who did not complete the program. Comparing the demographic and criminal history profiles of participants who completed the program and those who did not revealed no significant differences – this implies that the</li> </ul>

	reduction in recidivism was due to RICC, not the underlying characteristics of those who completed the program.
<b>Bibliografía relevante.</b>	<p>- Outcome Evaluation Report. Peter Wicklund, Patricia Breneman and Tim Halvorsen of The Vermont Center for Justice Research. 2011. Chittenden County Rapid Intervention Community Court Outcome Evaluation. <a href="http://www.vcjr.org/reports/reportscrimjust/reports/chittricc_files/Chitt%20Rapid%20Referral%20Rpt2.pdf">http://www.vcjr.org/reports/reportscrimjust/reports/chittricc_files/Chitt%20Rapid%20Referral%20Rpt2.pdf</a></p> <p>- Policy and Procedures Manual. Thomas J. Donovan, Jr. State's Attorney. <a href="http://www2.leg.state.vt.us/CommitteeDocs/House%20Human%20Services/Bills/S.295/Witness%20Testimony/4-15-2014~Emmet%20Helrich~S.295~Chittenden%20County%20Rapid%20Intervention%20Policy%20Manual.pdf">http://www2.leg.state.vt.us/CommitteeDocs/House%20Human%20Services/Bills/S.295/Witness%20Testimony/4-15-2014~Emmet%20Helrich~S.295~Chittenden%20County%20Rapid%20Intervention%20Policy%20Manual.pdf</a></p>



## Alternativas procesales

### 12. Programa de tratamiento bajo supervisión judicial – Costa Rica

<b>Programa de tratamiento bajo supervisión judicial</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Costa Rica- Primer Circuito Judicial de San José y Tercer Circuito Judicial (Pavas). 2013
<b>Tipo de alternativa</b>	Procesal Programa
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	Brindar una atención especializada e integral a las personas imputadas que presentan consumo problemático de sustancias psicoactivas Se dirige a personas que han cometido delitos y que tienen consumo problemático
<b>Descripción general</b>	<p>El Programa de Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial se enmarca dentro del Programa de Justicia Restaurativa e implica un cambio en el papel del juez en el proceso.</p> <p>El Programa de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial funciona mediante la intervención de un equipo interdisciplinario de la Oficina de Justicia Restaurativa con capacitación especializada, constituido por un(a) juez(a) penal, un fiscal(a), un defensor(a) público(a), un trabajador(a) social y un psicólogo(a), quienes deben remitir al componente sanitario (IAFA) a las personas imputadas que presentan una aparente problemática de consumo, para que sean los equipos interdisciplinarios de dicha entidad, quienes refieran la recomendación técnica de ingreso y tratamiento específico de cada caso en particular.</p> <p>La remisión de las personas imputadas al Programa de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial, se estructura a partir de la aceptación de las medidas alternas por parte de la persona acusada, estas son: la Suspensión del Proceso a Prueba, la Reparación del Daño y la Conciliación.</p> <p>En el Poder Judicial ha definido requisitos procesales para que las personas imputadas puedan beneficiarse del PTDJ, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No haber aplicado una medida alterna en los últimos 5 años.</li> <li>2. No contar con condenas previas por delitos dolosos, sancionado con pena superior a los seis meses de prisión.</li> <li>3. Que la comisión del delito este relacionado a una adicción.</li> <li>4. Que el delito territorialmente haya sido cometido en alguno de los dos circuitos judiciales aprobados (Primer Circuito Judicial de San José y Tercer Circuito Judicial -Pavas-).</li> <li>5. Si hay víctima en la comisión del delito, que se cuente con su</li> </ol>

	<p>consentimiento, por exigencia de la Ley de Protección de Víctimas y Testigos.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. La voluntariedad del imputado a someterse al PTDJ.</li> <li>7. Los delitos aprobados por la Fiscalía General de la República en sus circulares 06 ADM , 08 ADM ambos de 2012 cuya comisión del delito este relacionado a una adicción, siendo los más comunes: Conducciones Temerarias, Hurtos de todo tipo, Portaciones Ilícitas de Arma Permitida, Amenazas Agravadas (siempre y cuando no haya utilizado arma de fuego), Daños, Daños Agravados, Violación de Domicilio, Retención indebida (exceptuando las de la CCSS), Apropiaciones Irregulares, Lesiones Culposas, Tentativa de Homicidios Culposos, Uso de Documento Falso, Agresión con Arma, usurpación, Descuido de Animales y Violación de Sellos.</li> <li>8. Delitos sin utilización de armas de fuego o violentos. No se permite delitos establecidos en la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, tales como venta, almacenamiento, transporte, fabricación, comercio, etc.</li> </ol> <p>El PTDJ después de superar las fases de exploración, planificación y capacitación inició la recepción de casos en el mes de agosto 2013 como un plan piloto con una duración de 2 años, entre los objetivos que se plantearon se espera la atención de 20 personas por año que deben seguir un plan de tratamiento de 5 fases con una duración de un año y ocho meses.</p> <p>Actualmente, el Poder Judicial ha remitido 9 casos (7 hombres y 2 mujeres) para valoración preliminar en el IAFA. El Ministerio Público ha remitido 8 casos (88,89%) y la Defensa Pública 1 (11,11%). En todos los casos, el equipo interdisciplinario del componente sanitario ha aprobado el ingreso al PTDJ. Se han revocado 2 casos (22,22%) únicamente. De los ingresos en estos meses de andadura puede concluirse que el programa avanza firmemente.</p>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>Arias Madrigal, Doris. El Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial. La Experiencia de Costa Rica. OEZ/Ser. L/XIV. 2.55 CICAD/doc.2107/14, 30 de abril de 2014. En: <a href="http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2642">http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2642</a></p> <p>OIJ/UNODOC/ROPAN, Reporte de Situación de Costa Rica 2013: Tráfico de drogas y amenazas del Crimen Organizado, en: <a href="http://www.unodc.org/documents/ropan/Sitation_Report/Reporte_de_Situacion_de_Costa_Rica_de_2013.pdf">http://www.unodc.org/documents/ropan/Sitation_Report/Reporte_de_Situacion de Costa Rica de 2013.pdf</a></p> <p>XVIII Informe del Estado de la Nación, 2012 en: <a href="http://www.estadonacion.or.cr/estado-nacion/nacion-informes-antteriores/informes-2001-2011/informe-actual">http://www.estadonacion.or.cr/estado-nacion/nacion-informes-antteriores/informes-2001-2011/informe-actual</a></p> <p>UNODC, Informe Mundial sobre las drogas, 2009 en: <a href="http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/Executive_summary_Spa">http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/Executive_summary_Spa</a></p>

	<u>nish.pdf</u>
--	-----------------

### 13. Hope

<b>Hawaii's Opportunity Probation with Enforcement (HOPE)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Estados Unidos, Hawaii 2004
<b>Tipo de alternativa</b>	Procesal Programa de iniciativa judicial
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	Its goals are to reduce recidivism and probation violations among probationers at high risk of drug use, missed appointments, or new criminal behavior. Personas en libertad condicional y con alto riesgo de reincidencia
<b>Descripción general</b>	<p>La idea que fundamenta la orientación de la iniciativa es que son más efectivas las sanciones rápidas y ciertas, que aquellas que son severas. Conceptualmente está fundado en la idea de responsabilidad personal y accountability, promovidas mediante la imposición rápida de sanciones por el incumplimiento.</p> <p>The HOPE program starts with a warning hearing, where a judge clearly explains the conditions of probation to be complied with, as well as the consequences for noncompliance. In particular, the judge emphasizes that each violation will lead to a short but immediate stay in jail. Each probationer is told to call a number every morning to find out whether they are to be tested for drug use, and that if they miss their appointment or fail their drug test they will be arrested and brought before the judge. Every positive drug test and every missed probation appointment is met with a sanction. If probationers continue to test positive for drugs, or they request treatment at any time, they will be sent to intensive inpatient drug treatment.</p> <p>The original Hawaii HOPE program was the subject of an independent evaluation, which found that, compared to probationers in a control group, after one year the HOPE probationers were 55% less likely to be arrested for a new crime; 72% less likely to use drugs; 61% less likely to skip appointments with their supervisory officer; and 53% less likely to have their probation revoked. As a result, HOPE probationers served or were sentenced to 48% fewer jail days, on average, than the control group. To determine whether these results could be replicated in other settings, the U.S. Department of Justice has funding a demonstration field experiment in four different states with a rigorous evaluation to determine the impact of HOPE in reducing probationer re-offending and identify the likely challenges and costs a jurisdiction should expect when implementing the program. Results are expected in 2015.</p>
<b>Bibliografía relevante</b>	. Hawaii's Swift and Sure Probation (2008) Artículo corto de un miembro del instituto Nacional de Justicia. Disponible en: <a href="http://hopehawaii.net/assets/nij-hawaii-s-swift-and-sure-">http://hopehawaii.net/assets/nij-hawaii-s-swift-and-sure-</a>

	<p><u>probation-2008.pdf</u> Consultado el: (8 de julio de2014). <a href="http://hopehawaii.net/assets/2012-6204-report-appendix-a-b-and-c.pdf">http://hopehawaii.net/assets/2012-6204-report-appendix-a-b-and-c.pdf</a></p>
--	--

#### 14. Tribunal de Tratamiento de Drogas- Chile

<b>Tribunales de Tratamiento de Drogas – TTD</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Chile
<b>Tipo de alternativa</b>	
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	
<b>Descripción general</b>	
<b>Bibliografía relevante</b>	

## 15. Tribunal de Tratamiento de Drogas –Salta

<b>Tribunal de Tratamiento de Drogas (Piloto)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Ciudad de Salta, Argentina.
<b>Tipo de alternativa</b>	Procesal Adoptada por disposición de la Corte de Justicia de Salta, formalizada mediante Acordada N° 11480/2013 del 3 de octubre de 2013.
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reducir el índice de reincidencia en delitos relacionados con estupefacientes y servir de instrumento para la descongestión de la labor judicial, brindando una respuesta original al creciente nivel de conflictividad penal y, al mismo tiempo, proponiéndose la reinserción de quienes padecen un consumo problemático y que se hallan en conflicto con la ley penal.</li> <li>- Imputados con suspensión del procedimiento a prueba que padezcan consumo problemático y hayan cometido un delito menor.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimiento penal alternativo dentro del sistema de justicia que identifica tempranamente a los consumidores problemáticos de estupefacientes en el contexto del proceso penal y les ofrece acceso inmediato a tratamiento bajo la directa y cercana supervisión del juez como una alternativa a la conclusión del proceso. Funcionan como programas dentro de los tribunales. El tratamiento se extiende durante el tiempo por el cual se hubiera acordado la suspensión del juicio a prueba y, si es satisfactorio, la acción penal queda extinguida. El tiempo de tratamiento podrá ser extendido dentro de unos plazos preestablecidos</li> <li>- Siendo un plan piloto de reciente implementación (el 16 de octubre de 2013 se inauguró el primer Tribunal de Tratamiento), no pueden analizarse a la fecha integralmente los resultados obtenidos. No obstante, este año una misión de la OEA ha hecho una evaluación sobre el funcionamiento de dicho Tribunal, resaltando como principales logros: i) el desarrollo de un protocolo que define los procedimientos y las responsabilidades en la colaboración de las distintas agencias, ii) la construcción de lazos y cooperación interagenciales fuertes, iii) la existencia de una red de servicios de salud en toda la provincia que incluye tratamiento de adicción. Y señaló como su principal reto la necesidad de identificar participantes admisibles dentro del sistema legal existente, teniendo en cuenta que el programa no funciona con legislación específica que lo reglamente.</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acordada 11480/2013 Corte de Justicia de Salta</li> <li>- Comunicado de Prensa de la OEA <a href="http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-393/13">http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-393/13</a>)</li> </ul>

	<p>- Treviño, Mónica (2014). Evaluación formativa y sumativa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas. Informe de evaluación. Disponible en: <a href="http://cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/publications/files/Evaluation_DTCprogram2014_SPA.pdf">http://cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/publications/files/Evaluation_DTCprogram2014_SPA.pdf</a></p>
--	--



## 19. Directrices de Inglaterra y Gales

<b>Directrices de sentencias</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Inglaterra y gales 2012
<b>Tipo de alternativa</b>	Post Procesal Revisión de penas por delitos de drogas
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	Imponer las penas tomando en consideración factores que contribuyan a racionalizar el uso del derecho penal.
<b>Descripción general</b>	<p>A principios de 2012 el Sentencing Council for England and Wales – creado en 2010 – emitió las directrices de sentencias para delitos de drogas. Éstas constituyen un ejemplo de medida que busca determinar criterios de sentencias más consistentes y proporcionales. Las directrices no modifican la ley en la materia – Misuse of Drugs Act – sino provén al poder judicial con orientaciones sobre rangos de sentencias y criterios a tomar en cuenta en el establecimiento de una pena.</p> <p>Se contemplan siete categorías de delitos: introducción o extracción de drogas controladas al país, suministro u oferta de suministro, posesión con fines de proveerla a otra persona, producción, cultivo de la planta cannabis, permitir el uso de instalaciones y posesión de sustancias controladas. Por cada delito se explicitan rangos de ofensa, o sea el rango de sentencia mínima y máxima aplicable.</p> <p>Para establecer la pena se toman en cuenta estos factores: modalidad del delito, tipo y cantidad de sustancia y el rol del infractor (papel de liderazgo, significativo o menor). A su vez, se establecen factores atenuantes y agravantes. Éste es un elemento sumamente novedoso, ya que normalmente las leyes de drogas – en conformidad con la Convención de 1998 – contemplan únicamente factores agravantes mas no atenuantes.</p> <p>Uno de los grupos que se ha visto beneficiado son las mujeres usadas como mulas por las redes del tráfico internacional de drogas: con las directrices, la duración de las sentencias promedio aplicadas en ese supuesto se ha reducido de casi la mitad.</p> <p>Una evaluación realizada por el Sentencing Council muestra cómo, globalmente, en los primeros diez meses desde la publicación de las directrices, 100% de las sentencias emitidas responden a los rangos sugeridos por las mismas. Cabe precisar que en la mayoría de los casos las penas impuestas son de servicios a la comunidad y sólo alrededor de 9 por ciento de las personas acusadas de un delito de droga reciben una condena privativa de la libertad. En el caso de posesión, desde 1998 se ha</p>

	<p>puesto énfasis en programas de desvío y rara vez se sancionan. Por lo general se dirimen con una amonestación verbal o multas.</p>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>EMCDDA, “A definition of drug mules for use in a European context”, 2012, <a href="http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/drug-mules">http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/drug-mules</a>;</p> <p>Reino Unido, “Misuse of Drugs Act”, 1971, <a href="http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/contents">http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/contents</a> ;</p> <p>Sentencing Council (2011), Analysis and Research Bulletins, “Drug Offences”, <a href="http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Analysis_and_Research_Bulletins_-_Drugs_Offences.pdf">http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Analysis_and_Research_Bulletins_-_Drugs_Offences.pdf</a> ;</p> <p>Sentencing Council (2012), “Drug Offences Definitive Guideline”, <a href="http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/">http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/</a>;</p> <p>Sentencing Council (2013), <i>Crown Court sentencing survey</i>, 2013, <a href="http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/facts/sentencing-survey.htm">http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/facts/sentencing-survey.htm</a> .</p>

**Alternativas post- procesales**

**17. Retained Jurisdiction Hybrid Model**

<b>Retained Jurisdiction Hybrid Model - USA</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	USA, Texas (Place of birth) Implemented in Dallas (2001) and several other jurisdiction in Texas. There is a similar program that has been implemented in Idaho (Rider Program)
<b>Tipo de alternativa</b>	- Post-conviction - The program was created as a result of legislation in Texas that established special facilities within prisons.
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	Main Objective: To prevent crime by ensuring addicts complete inpatient drug treatment and continue to remain drug free to lead a productive and sober life.  Target population: Intended for problematic users who are drug offenders. In other jurisdictions (Idaho), this has included traffickers (small and large.)
<b>Descripción general</b>	Judges can sentence offenders to the Substance Abuse Felony Punishment Facility. At the facility, which is segregated from the prison population but on the prison grounds, offenders receive in-custody treatment for between six and nine months. After release, offenders are heavily monitored by the re-entry court judge and are provided with continuing treatment and rehabilitative services. This program is unique in that it combines treatment while incarcerated with continual support and supervision into probation. The offender is engaged and supervised throughout the entire process by a judge.  Results: According to several online sources, the program has “reduced crime and saved tax dollars.” The report assessing the success of the program could not be located.
<b>Bibliografía relevante</b>	

## 18. Right Living House

<b>Right Living House (RLH)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Bermuda 2010
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Post-conviction</li> <li>- Program created by the Bermuda Department of Corrections and Department for National Drug Control, about in response to a campaign speech commitment by the premier of Bermuda.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Main objective: To reduce recidivism.</p> <p>Target population: offenders with substance use disorders.</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Offenders are referred through the Bermuda Department of Corrections, Court Services and the Parole Board. Offenders must have enough time left in their sentence to complete the in-prison and parole components of the treatment program. Offenders are provided with 9-12 months or residential therapy in a therapeutic community located on prison property but separated from the general population. Participants are provided with individual assessments, individual and group counseling, facilitated groups and a structured living environment. Participants also engage in community service activities. After release from prison, they are provided with six months of community-based after care.</p>
<b>Bibliografía relevante</b>	<a href="http://www.cecintl.com/facilities_ip_bm_001.html">http://www.cecintl.com/facilities_ip_bm_001.html</a>

## 19. Community Service Order

<b>Community Service Order (CSO)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Grenada, Trinidad and Tobago, Dominica, St. Kitts/ Nevis (1997, 2005 y 2007)
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Post-procesal. Community service orders are a post-conviction alternative. The magistrate in charge of sentencing has the discretionary power to send a defendant to treatment or a community service order.</li> <li>- In some countries (Trinidad and Tobago and Dominica) CSOs are implemented through legislation. Other countries (Grenada and St. Kitts/Nevis) provide discretion to magistrates to use CSOs and are considering formal legislation. Even where legislation is in place, CSOs may come into more use through magistrate's discretion.</li> <li>-</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- To offer the offender an opportunity to compensate society for the wrong they have done by performing work for the benefit of the community, instead of going to prison.</li> <li>- A community service order is usually only available for non-violent offenders “who would normally attract a short sentence and who do not pose a threat to society.” In many cases these are drug users. In cases of substance use disorder, treatment (when available) is paired with community service. Available materials on CSO's in the Caribbean indicate that drug traffickers are always excluded.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- If a defender is eligible (non-violent; sentence would normally be two years or less, etc.) they can be given a community service order by the court. In Trinidad and Tobago, the majority of CSO's have been issued for marijuana possession. The probation officer must report that the defendant must be willing and able to comply with the order. In most cases, the participant is supervised by the probation department. Participants are sent to public institutions, NGOs or CBOs to carry out voluntary work for a number of hours determined by the magistrate. Work can range from reforestation and maintenance to food preparation and senior care. Participants must complete the number of hours required and comply with program conditions. If they do not comply with the order, they can receive a fine, a new order or their prison sentence reinstated.</li> <li>- Self-reporting from the Ministry of Social Development in Trinidad and Tobago notes that the recidivism rates for participants are between 15 and 20%</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementation Manual. Marcus Day (Director of Caribbean Drug Abuse Research Institute). 2004. A Manual for the Implementation of Community Service Orders in the O.E.C.S  <a href="http://www.caricom.org/jsp/community_organs/sustainable_develop">http://www.caricom.org/jsp/community_organs/sustainable_develop</a></li> </ul>

	ment/custodial_sentencing_manual.pdf - PowerPoint presentation. Claire Blandin (Chief Probation Officer for Trinidad and Tobago). PRESENTATION TO CARIBBEAN REGIONAL CONFERENCE PROMOTING ALTERNATIVES TO CUSTODIAL PUNISHMENT.
--	--

## 20. Community Courts

<b>Community Courts</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	USA, Canada, Australia, Singapore.
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Post procesal. Community courts are a post-conviction intervention.</li> <li>- In New York City, community courts operate without special legislation. In some other jurisdictions, enabling legislation has been enacted.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The main objective is to solve individual and neighborhood problems using a coordinated response under judicial supervision while increasing public trust in the justice system.</li> <li>- Although community courts do not exclusively target drug users or defendants with drug charges, they do provide alternative sanctions (including treatment) for these populations. (Eligibility for participation in a community court is based on the location of the offense committed, rather than specific problems of offenders.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The Red Hook Community Justice Center in Brooklyn, NY – presided over by a single judge - serves an area with a population of about 220,000. Persons arrested for eligible offenses (typically cases potentially facing up to one year in jail) in the area served by the court are screened and, if the circumstances suggest a need, given a more in-depth assessment for addiction, mental illness and other problems. If an eligible offender agrees, the case is resolved with community service, social service (possibly including drug treatment), or a combination of the two. Clients participating in drug treatment are subject to drug testing, ongoing judicial supervision, and the use of incentives and sanctions depending on progress. The court follows the philosophy that relapse is part of recovery, so when participants fail to comply with program requirements, they may be required to write an essay, perform community service, participate in a more intensive treatment modality or, in some cases, spend time in jail. Defendants who repeatedly break the rules can face termination from the program and are subject to traditional sanctions.</li> <li>- Highlights of a recent independent evaluation of Red Hook by the National Center for State Courts:            Increased Use of Alternative Sanctions - The Justice Center increased the use of alternative sentences: 78 percent of offenders received community service or social service sanctions, compared with 22 percent among comparable cases processed at the regular criminal courthouse in Brooklyn            Reduced Use of Jail - The Justice Center reduced the number of offenders receiving jail sentences by 35 percent. In addition, there</li> </ul>

	<p>were significant differences in how the Justice Center used jail compared to the downtown courthouse. At Red Hook, almost no defendants (1 percent) received jail at arraignment. Instead, jail was reserved as a “secondary” sanction, for offenders who were noncompliant with their initial community or social service sentences.</p> <p>Reduced Recidivism - Adult defendants handled at the Justice Center were 10 percent less likely to commit new crimes than offenders who were processed in a traditional courthouse; juvenile defendants were 20 percent less likely to re-offend. Further analysis indicated that these differences were sustained well beyond the primary two-year follow-up period.</p> <p>Cost-Efficiency - For each of the 3,210 adult misdemeanor defendants arraigned at the Justice Center in 2008, taxpayers realized an estimated savings of \$4,756 per defendant in avoided victimization costs relative to similar cases processed in a traditional misdemeanor court –a total of \$15 million in avoided victimization costs. Researchers concluded that savings program costs by a factor of nearly 2 to 1.</p>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>- A Community Court Grows in Brooklyn: A Comprehensive Evaluation of the Red Hook Community Justice Center, National Center for State Courts.  <a href="http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/documents/RH%20Evaluation%20Final%20Report.pdf">http://www.courtinnovation.org/sites/default/files/documents/RH%20Evaluation%20Final%20Report.pdf</a></p>



## 21. Amnistía Masiva

<b>Mass Amnesty on Georgia</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Georgia (País) 2012
<b>Tipo de alternativa</b>	- Post procesal - Reforma legal
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Objetivo: Reducir el número de personas reclusas y de personas sentenciadas de manera condicional; y liberar a los presos políticos en Georgia.</p> <p>Beneficiarios: Personas que, sin haber sido condenadas previamente por crímenes dolosos, se encuentran al momento de expedir la ley condenadas por crímenes de menor gravedad según el Código Penal de Georgia. Se exceptúan las personas condenadas por un amplio número de delitos en su mayoría peligrosos<sup>4</sup>.</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Los beneficiarios serán absueltos ('discharged') de toda responsabilidad penal y de cualquier castigo punitivo. En los casos de personas que se encuentran procesadas pero que no han recibido una condena, el otorgamiento de la amnistía será decidido por el fiscal del caso. La amnistía sobre personas condenadas será decidida por la corte correspondiente. Las decisiones relativas a la aplicación de esta ley podrán ser apeladas por las partes ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Georgia.</p> <p>Frente a delitos de drogas: Las personas condenadas por delitos de drogas (sin importar su</p>

<sup>4</sup> Se exceptúan las personas condenadas por los siguientes delitos (traducción propia):

- Crímenes de menor gravedad que resultaron en la pérdida de una vida humana. (P. ej. Mercy killing, murder of negligence, Violation of rule on handling with microbiological or other biological agent or toxin causing death by negligence, entre otros).
- Daño intencional y grave a la salud (similar a las lesiones personales graves)
- Crímenes contra la libertad sexual
- Crímenes contra los derechos humanos y libertades individuales
- Incitación a menores a realizar actividades antisociales (incluyendo perversiones sexuales y prostitución).
- Incitar a alguien a participar en prostitución contra su voluntad.
- Crímenes contra el Estado
- Malversación
- Obstaculización de la justicia o de la investigación judicial
- Falsificación de evidencia en procesos penales
- Encubrimiento en actividades penales
- No denuncia de un crimen
- Crímenes contra la ejecución de órdenes judiciales
- Incitación o llamado a guerras agresivas

	<p>cantidad) son también beneficiarias de la amnistía siempre que: i) no hayan sido condenadas en la modalidad de venta (‘sale’) de narcóticos o sustancias psicoactivas, y ii) no haya sido condenado previamente por crímenes intencionales o dolosos(exceptuando aquellos crímenes de drogas que no involucren venta de sustancias ilícitas).</p> <p>Las personas condenadas por preparación, compra o tenencia de pequeñas cantidades de sustancias ilícitas, o por cualquier actividad dirigida al consumo de drogas, son beneficiarias de la amnistía sin condicionamiento alguno.</p> <p>La ley contiene tratos especiales a menores de edad y mujeres, quienes pese a no cumplir los requisitos para acceder a la amnistía, podrían ver reducidas sus condenas cuando hubieran cometido delitos graves, que no impliquen la muerte de una persona y sin que anteriormente hubieran cometido algún delito doloso. (Para más detalles sobre estos tratos especiales ver ficha de experiencia larga).</p> <p><b>RESULTADOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entre junio de 2012 y febrero de 2013, la población carcelaria de Georgia pasó de 24.079 reclusos a tan solo 11.107</li> <li>- Hasta el 27 de febrero de 2013, habrían quedado en libertad un total de 7.985 personas.</li> <li>- Según un informe periodístico con datos provenientes del Ministerio de Prisiones y Asistencia Legal, hacia el final de 2013 el número de reclusos en Georgia habría bajado a 9.011 personas.</li> </ul>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>Noticia: “Georgia’s Prison Population More tan Halved”. Disponible en: <a href="http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25801">http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25801</a></p> <p>The Law of Georgia on Amnesty (documento oficial). Disponible en: <a href="http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2013)003-e">http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF(2013)003-e</a></p>

## 22. Indulto de Bolivia

<b>Decreto presidencial de indulto y amnistía en Bolivia</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Bolivia 2013
<b>Tipo de alternativa</b>	- Post procesal (indulto) y Procesal (amnistía). - Decreto presidencial
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	Objetivo central: Regular la concesión de indulto y amnistía en favor de las personas privadas de libertad (en general) por causas humanitarias.  Beneficiarios del indulto: Personas que cuenten con sentencia ejecutoriada por delitos cuya pena sea igual o menor a ocho (8) años de prisión, y que cumplan con ciertas condiciones  Beneficiarios de la amnistía: procesados en materia penal que se encuentren en etapa de juicio oral, público, continuo y contradictorio; apelación restringida o casación, por delitos cuya pena sea igual o menor a cuatro (4) años, y que cumplan con ciertas condiciones <sup>5</sup> .
<b>Descripción general</b>	La Dirección General de Régimen Penitenciario debe hacer una lista de beneficiarios que cuenten con la documentación requerida.

<sup>5</sup> Estas condiciones son:

- a. Que el beneficiado no haya sido reincidente.
- b. Sean adultos mayores, varones de cincuenta y ocho (58) años y mujeres de cincuenta y cinco (55) años de edad que hayan cumplido un tercio (1/3) parte de su condena a pena privativa de libertad;
- c. Sean adolescentes imputables y jóvenes hasta veinticinco (25) años que hayan cumplido un tercio (1/3) parte de su condena a pena privativa de libertad;
- d. Sean personas con enfermedad grave o incurable, en periodo terminal;
- e. Personas con grado de discapacidad grave o muy grave siempre que la atención amerite un cuidado especial y que hayan cumplido una cuarta (1/4) parte de su condena a pena privativa de libertad;
- f. Los padres y madres que tuvieran a su cuidado uno o varios de sus hijos o hijas menores de doce (12) años de edad, viviendo dentro del recinto penitenciario que hayan cumplido una tercera (1/3) parte de su condena a pena privativa de libertad;
- g. Para los casos de amnistía, no será requisito la existencia de sentencia condenatoria.

Excepciones: a i) casos que involucren delitos que no admiten amnistía o indulto por mandato constitucional, ii) Personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada o procesadas por delitos de asesinato, violación a niño, niña o adolescente, delitos contra la libertad sexual, traición a la Patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando; y iii) casos que involucren delitos contenidos en la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”.

	<p>Además, el interesado debe realizar la solicitud de manera voluntaria y por escrito. La entidad encargada del trámite y ejecución de las solicitudes y demás casos identificados es La Dirección General de Régimen Penitenciario junto con las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario. Además se asegura el asesoramiento y asistencia gratuita y celera de varias entidades como la Defensoría del Pueblo.</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 227 personas privadas de libertad beneficiadas (1.56% de la población reclusa total en Bolivia que es de 14.500 personas) entre el 16 de septiembre de 2013 y el 8 de enero 2014. [Fuente: PIE Bolivia).</li> <li>- No se conoce cuántas de las personas beneficiadas fueron procesadas o condenadas por delitos de drogas. Sin embargo, dado que la Ley 1008 se caracteriza por imponer penas muy altas a conductas relacionadas con drogas, es poco probable que las personas condenadas por esta clase de delitos cumplan los requisitos legales y puedan ser beneficiadas por la medida.</li> </ul>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>“Impacto de la ley de indulto y amnistía en Bolivia” por <b>Godofredo Reinicke Borda, Puente, Investigación y Enlace (PIE), Bolivia.</b>  <b>Disponible en:</b> <a href="http://idpc.net/es/blog/2014/02/impacto-de-la-ley-de-indulto-y-amnistia-en-bolivia">http://idpc.net/es/blog/2014/02/impacto-de-la-ley-de-indulto-y-amnistia-en-bolivia</a></p> <p>Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía. Disponible en:  <a href="http://comunicacion.presidencia.gob.bo/docprensa/pdf/20130911-12-40-56.pdf">http://comunicacion.presidencia.gob.bo/docprensa/pdf/20130911-12-40-56.pdf</a></p>

## 23. Indulto Ecuador

<b>Indulto de mulas del narcotráfico en Ecuador</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Ecuador
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Posterior a la sentencia</li> <li>- Adoptada por Resolución de Asamblea Constituyente a petición de Gobierno (2008)</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Objetivo central: Indultar a personas condenadas a penas privativas de la libertad por tráfico de pequeñas cantidades de droga, como medida de “humanización” del sistema penitenciario.”</p> <p>Beneficiarios: Personas condenadas por el transporte de pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, denominadas “mulas”, o por el pequeño comercio de las mismas.</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Los beneficiarios deben cumplir con tres requisitos: i) haber recibido sentencia condenatoria, ii) que el peso neto de la sustancia estupefaciente y psicotrópica por la que fue sentenciado, fuera equivalente o menor a 2 kilogramos; y iii) que la persona solicitante haya cumplido el 10% de la sentencia impuesta con un mínimo de un año. Los extranjeros beneficiados por el indulto son deportados conforme a las normas vigentes.</p> <p>Serán las autoridades judiciales competentes para cada caso quienes deberán, de oficio o a petición de parte, dictar las correspondientes órdenes de excarcelación cuando se cumplan los requisitos fijados por la resolución, en un plazo máximo de treinta días desde la expedición de la misma.</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En enero de 2009, tras un año de implementación de la medida, se logró la liberación de 1.500 personas condenadas por microtráfico. En 2010, Según la Defensoría Pública de Ecuador, dicha cifra subió a cerca de 2.000 indultados.</li> <li>- Se liberó el 95% de los internos que tenían derecho al indulto.</li> <li>- La reincidencia de las personas indultadas disminuyó notablemente, pues mientras la tasa de reincidencia de personas que cumplen su pena por delitos relacionados con narcotráfico es del 70%, en el caso de las personas indultadas no alcanzó el 2%</li> <li>- El 9% de las personas indultadas eran extranjeros, quienes fueron deportados a sus países tras haber recobrado su libertad</li> <li>- El 30% de las personas indultadas eran mujeres, siendo la Cárcel de Mujeres de Quito uno de los centros de reclusión que más se benefició con la medida</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	Asamblea Constituyente. Resolución para el indulto de las personas que transportan pequeñas cantidades de sustancias psicotrópicas y

	<p>estupefacientes. Disponible en:  <a href="http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2008/julio/code/18918/registro-oficial-no-378---jueves-10-de-julio-de-2008-suplemento#ASAMBLEACONCEDESEINDULTOTRANSPOSUSTAP SIC">http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-oficiales/2008/julio/code/18918/registro-oficial-no-378---jueves-10-de-julio-de-2008-suplemento#ASAMBLEACONCEDESEINDULTOTRANSPOSUSTAP SIC</a></p> <p>Defensoría Pública de Ecuador (2010). Reporte audiovisual “Indulto a mulas del narcotráfico”. Disponible en:  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ojCqIu4XSv4">https://www.youtube.com/watch?v=ojCqIu4XSv4</a></p> <p>Youngers C., y Edwards, S.G. (2010). Informe sobre Ecuador. Reforma sobre legislación de drogas en Ecuador. TNI y WOLA. Disponible en:  <a href="http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/Informes%20alternativos/Ecuador-informeWOLA.pdf">http://www.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/Informes%20alternativos/Ecuador-informeWOLA.pdf</a></p> <p>Metaal, P. (2009). “Indulto de mulas en Ecuador: una propuesta sensata”. Series de reformas legislativa en materia de drogas No. 1. TNI. Disponible en: <a href="http://www.undrugcontrol.info/es/publicaciones/serie-reforma-legislativa/item/319-indulto-de-mulas-en-ecuador">http://www.undrugcontrol.info/es/publicaciones/serie-reforma-legislativa/item/319-indulto-de-mulas-en-ecuador</a></p>
--	--

## 24. Reducción y sustitución de Sentencias –España

<b>Reducción y sustitución de sentencias</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	España 2010
<b>Tipo de alternativa</b>	Post procesal
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	Lograr proporcionalidad de las sentencias y reducir la población carcelaria en España, en especial la población extranjera. Todos los infractores, pero con impacto especial en mulas extranjeras (usando la definición de mulas del EMCDDA: <i>a drug courier who is paid, coerced or tricked into transporting drugs across an international border but who has no further commercial interest in the drugs</i> ’).
<b>Descripción general</b>	<p>Modificación al artículo 368 del CP, para quedar como sigue: Artículo 368 del CP: “Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión <b>de tres a seis años</b> (antes la pena máxima era de 9) y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.</p> <p>No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. No se podrá hacer uso de esta facultad si concurriere alguna de las circunstancias a que se hace referencia en los artículos 369 bis y 370 (vinculados a funcionarios, personas pertenecientes a organizaciones criminales, etc.)”.</p> <p>En concomitancia con el artículo 89 del mismo código: “Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España”.</p>
<b>Bibliografía relevante</b>	Código Penal Español, <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444">https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444</a> .  EMCDDA, “Country Chart: Spain”,

	<p><a href="http://www.emcdda.europa.eu/countries/spain">http://www.emcdda.europa.eu/countries/spain</a>.</p> <p>EMCDDA, “A definition of drug mules for use in a European context”, 2012, <a href="http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/drug-mules">http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/drug-mules</a>.</p> <p>Del Val Cid, Consuelo y Antonio Viedma Rojas (eds.), <i>Condenadas a la desigualdad. Sistema de indicadores de discriminación penitenciaria</i>. Barcelona, Icaria Editorial, 2012.</p>
--	--



## 25. Tratamiento para personas condenadas

<b>Tratamiento para penados</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	España
<b>Tipo de alternativa</b>	Post procesal
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	Internamiento en Unidades extrapenitenciarias para penados clasificados en tercer grado que necesiten un tratamiento específico para deshabituación de drogodependencias y otras adicciones
<b>Descripción general</b>	<p>Los penados que pueden aplicar al 3 grado y que tienen un uso problemático pueden acceder a estas unidades. Para acceder al tercer grado un penado debe haber cumplido con los términos de la sentencia establecidos por el CP y con sus responsabilidades civiles.</p> <p>A los penados de tercer grado les corresponde el régimen abierto (Véase artículo 83 “Objetivos y principios del régimen abierto” del Reglamento Penitenciario).</p> <p>Retomando del Reglamento Penitenciario: “1. Las Unidades Dependientes son unidades arquitectónicamente ubicadas fuera del recinto de los Centros penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario, sin ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación.</p> <p>2. Los servicios y prestaciones de carácter formativo, laboral y tratamental que en ellas reciben los internos <b>son gestionados de forma directa y preferente por asociaciones u organismos no penitenciarios</b> (mis negritas). Ello no obsta a que la Administración Penitenciaria pueda participar también en tales tareas con personal de ella dependiente, sin perjuicio de las funciones de control y coordinación que le competen. [...]”.</p>
<b>Bibliografía relevante</b>	<p>“Código Penal Español”, <a href="https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444">https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444</a>;</p> <p>EMCDDA, “Country legal profiles, Spain”, <a href="http://www.emcdda.europa.eu/countries/spain">http://www.emcdda.europa.eu/countries/spain</a>;</p> <p>“Ley Orgánica General Penitenciaria”, <a href="http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/">http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/</a></p>

	LeyOrganica/ “Reglamento penitenciario”, <a href="http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307">http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307</a> .
--	---

## 26. Drug Treatment Alternative to Prison

<b>Drug Treatment Alternative to Prison (DTAP) - USA</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Brooklyn, New York 1990
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicialmente fue procesal, pero desde 1998 se convirtió en Post procesal.</li> <li>- Programa administrativo (The program was developed by the Kings County District Attorney's Office without specific legislative authorization.)</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Main objective: To reduce recidivism and drug use by diverting nonviolent felony drug offenders to community-based residential treatment. It is worth noting that this program began before drug treatment courts came to Brooklyn.</p> <p>Target population: substance-abusing, nonviolent, repeat felony offenders. It targets offenders arrested in Brooklyn that face mandatory sentencing under New York State's second felony offender law. The intervention is explicitly for problematic users and particularly those who commit nonviolent crimes related to problematic use. It also includes individuals with problematic use charged with the sale of narcotics.</p>
<b>Descripción general</b>	<p>To be eligible, defendants must be 18 years or older, with a felony charge, at least one prior felony and must be "addicted to drugs and in need of substance abuse treatment." Defendants accepted into the program plead guilty and their sentences are deferred while they undergo treatment. Participants in the program are sent to long-term, intensive, residential drug treatment programs for 15 to 24 months. The treatment involves orientation followed by counseling, vocational and educational programs as well as transitional care with a focus on job counseling and placement. Treatment progress reports are submitted to DTAP staff. If participants do not comply with or complete the program they are sentenced on the guilty plea. In some cases, individuals who do not comply with the program can be readmitted. If they complete the program they may withdraw their guilty plea and have the case dismissed.</p> <p>Results:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2003 evaluation by Columbia University: participants who completed the DTAP program and graduated were 33% less likely to be rearrested, 45% less likely to be reconvicted and 87% less likely to return to prison than the comparable prison group. DTAP graduates were 3.5 times more likely to be employed after graduation than before their arrest. Before their arrest, 26% were working either part-time or full-time. Following successful completion of the program, 92% had found employment.</li> </ul>

	<p>DTAP participants remained in treatment 6 times longer than individuals in other long-term residential treatment programs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2004 study: participating reduced odds of a new re-arrest by 56 percent, a new reconviction by 60 percent, a new jail sentence by 59 percent, and a new prison sentence by 65 percent.</li> <li>- 2005 cost benefit analysis: DTAP average savings in criminal justice costs per participant was \$47,836</li> <li>- The average cost of each participant was \$40,718 over an average treatment period of 487 days.</li> </ul>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>Dynia, Paul, and Hung–En Sung. 2000. “The Safety and Effectiveness of Diverting Felony Drug Offenders to Residential Treatment as Measured by Recidivism.” <i>Criminal Justice Policy Review</i> 11(4):299–311.</p> <p>Belenko, Steven, Carol Foltz, Michelle A. Lang, and Hung–En Sung. 2004. “Recidivism Among High-Risk Drug Felons: A Longitudinal Analysis Following Residential Treatment.” <i>Journal of Offender Rehabilitation</i> 40(1/2):105–32.</p> <p>Zarkin, G.A., Dunlap, L.J., Belenko, S., &amp; Dynia, P. (2005). A benefit-cost analysis for the Kings County district attorney's Office Drug Treatment Alternative to Prison (DTAP) program. <i>Justice Research and Policy</i>, 7 (1):1-26.</p> <p>Annual Report. Anne J. Swern (First Assistant ADA). April 2007. <a href="http://www.prisonpolicy.org/scans/DTAP%20Sixteenth%20Annual%20Report.pdf">http://www.prisonpolicy.org/scans/DTAP%20Sixteenth%20Annual%20Report.pdf</a></p>

## Alternativas posibles desde antes del proceso hasta después de la sentencia

### 27. Restorative Justice Panels (RJP)

<b>Ficha resumen – Restorative Justice Panels (RJP)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Burlington Community Justice Center and Winooski Community Justice Center in Vermont, many other jurisdictions in Vermont and elsewhere. (USA, Vermont, Burlington)
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre procesal, Procesal y Post procesal</li> <li>- Programa administrativo (initiated by the Vermont Department of Corrections in collaboration with community based organizations)</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Main objective: To restore the harm caused by an offender’s actions on others.</p> <p>Target population: individuals who have committed low-level crimes. A number of participants have been charged with possession, many for committing nonviolent crimes related to problematic use, and in some cases trafficking (before marijuana was decriminalized in Vermont, close to 10% of their cases were for marijuana possession; today possession cases might be for LSD, cocaine and other substances.)</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Individuals can be referred through three sources: the Burlington Police Department, the prosecutor’s office, and criminal court. Once referred, participants meet with a 3-5 person volunteer panel to address the harm they have caused the community. The panel and the offender decide together how the offender will make amends. Reparations should be related to the crime and improve the community (letters of apology, community service, repair of or payment for damages). In some cases, people are asked to use a skill they have to make reparations. Once the group has agreed on the reparations and completed a Restorative Justice Agreement they have 45 days to complete their commitments. The group reconvenes to review progress and solve any problems.</p> <p>Results:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The odds of a new conviction after probation were reduced by 12% using the reparative justice board model.</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	Burlington Community Justice Center Restorative Justice Panels Website. <a href="http://www.burlingtonvt.gov/node/1457">http://www.burlingtonvt.gov/node/1457</a>

	<p>Outcome Evaluation. John Humphrey, Gale Burford and Meredith Huey. Reparative versus Standard Probation: Community Justice Outcomes. <a href="http://www.doc.state.vt.us/about/reports/reparative-v-probation/view">http://www.doc.state.vt.us/about/reports/reparative-v-probation/view</a></p>
--	---

## 28. Persecución diferenciada

<b>Persecución diferenciada</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Bélgica
<b>Tipo de alternativa</b>	Pre procesal: Medidas administrativas para cannabis al momento de la detención Procesal: imposición de sentencia o alternativa a la prisión Post procesal: suspensión de la pena o canalización a tratamiento Adoptadas por ley y directrices
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	- Diferenciación en el abordaje de acuerdo al tipo de sustancia, conducta y consumo. - Dirigida a usuarios de cannabis, usuarios problemáticos y usuarios bajo influjo de sustancias
<b>Descripción general</b>	<p><b>Diferenciación:</b> El Decreto real de 2003 establece tres tipos de infracciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relacionadas con cannabis para uso personal;</li> <li>• Aquéllas relacionadas con cannabis y en las que concurren circunstancias agravantes (especificadas en el Artículo 2 bis de la Ley de 1921);</li> <li>• Todas las demás</li> </ul> <p><b>Políticas en acto con respecto a cannabis:</b> -Poseer o cultivar cannabis sigue siendo una infracción, <i>sin embargo</i>: Se considera una prioridad baja de la política de persecución (“faible priorité de la politique des poursuites”) cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La persona en posesión de la droga es mayor de edad (para las personas menores de edad aplica la ley de protección de la juventud).</li> <li>• La cantidad de cannabis poseída es para uso personal, es decir, en cantidades iguales o menores a 3 gramos o a una planta hembra cultivada.</li> <li>• En el supuesto de uso problemático, el ministerio público será notificado y podrá sugerir tratamiento.</li> <li>• La detención no está acompañada de circunstancias agravantes de trastorno al orden público (detención en un centro penitenciario, en el entorno escolar, en lugares públicos, etc.)</li> </ul> <p>Las sanciones aplicadas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una multa de 15 a 25 euros en el caso de la primera detención;</li> <li>• Una multa de 26 a 50 euros en el caso de reincidencia dentro del primer año después de la primera detención;</li> <li>• Encarcelamiento de 8 días a un mes y una multa en el caso de otra reincidencia durante el segundo año.</li> </ul>

	<p>Estos casos son manejados a nivel policial.</p> <p><b>Políticas en los casos de otras sustancias</b>  La posesión y otras conductas (importación, exportación, entrega, conservación, etc.) son sancionadas con penas de entre tres meses y cinco años de prisión. Las penas pueden ser aumentadas en casos de presentarse ciertos agravantes.</p> <p><b>Políticas frente a los usuarios problemáticos responsables de cualquiera de los tres tipos de infracción</b>  La política belga tiende a no encarcelar a los usuarios con uso problemático, que venden para sustentar el consumo personal o que cometen delitos en razón de su dependencia.</p> <p>En el decreto de 2003 se establece que, si el ministerio público o el juez estiman que la persona tiene un uso problemático se puede canalizar con un <i>case manager</i> para su canalización a tratamiento. A su vez cuenta con otros mecanismos como suspensión de la sentencia, libertad condicional, mecanismos de mediación, etc.</p>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>EMCDDA, “Treatment as an alternative to prosecution or imprisonment for adults”, <a href="http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index13223EN.html">http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index13223EN.html</a>;</p> <p>EMCDDA, “Country legal profiles, Belgium”, <a href="http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&amp;country=BE">http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html?pluginMethod=eldd.countryprofiles&amp;country=BE</a>;</p> <p>Ministerio de Justicia de Bélgica, <a href="http://justice.belgium.be">http://justice.belgium.be</a>;</p> <p>“Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiants, psychotropes, désinfectants ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiants et psychotropes”, <a href="http://justice.belgium.be">http://justice.belgium.be</a></p> <p>“Arrêté royal réglementant les substances soporifiques et stupéfiants, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique”, <a href="http://justice.belgium.be">http://justice.belgium.be</a>.</p>



## Alternativas por perfiles particulares y poblaciones específicas

### 29. Back on Track

<b>Back on Track (BOT)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	United States. California. Cities of Atlanta, Dallas, Oakland, Brooklyn, Philadelphia. 2005
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pre-procesal. BOT is a prosecutor-led, court-based initiative that refers participants at charging – during the investigation and trial stage.</li> <li>- BOT is a program initially established by the San Francisco District Attorney’s Office in collaboration with Goodwill Industries (a non-profit), the Family Service Agency of San Francisco, the Public Defender’s Office, and the Probation department. In 2009, the California legislature enacted a law offering BOT as a statewide model for DA offices through AB 750. It is not clear whether it has been replicated in jurisdictions throughout California.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The main objective is reducing recidivism among low-level drug-trafficking defendants.</li> <li>- Young adults, ages 18-30 (primarily 18-24) who are facing their first felony charge for a low level-drug sale. The program targets first-time non-violent micro-traffickers with no prior convictions.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<p>- At charging, the SF DA’s office refers eligible (first-time, non-violent, no history of guns or gangs, no sale or possession at or near a school, charged with a sale or possession of less than 5 grams of a controlled substance) offenders to BOT. The program is managed by Goodwill Industries (a local nonprofit). Participants are required to attend orientation and participate in a 6-week intensive community service probation program. Following completion of the 6-week community service period they can choose to participate in the Back on Track program – plead guilty and defer their formal sentencing. The program is 12-18 months with personal goals mandating achievements in employment, education, parenting and child support in addition to 220 hours of community service. The program also provides food and transportation assistance as well as gift cards and stipends to incentivize participants. Participants meet three times a week with a case manager and appear in BOT court three times a month. To graduate, participants must find employment or enroll in school full time. If the program is completed, the case is dismissed and their record is clean. If participant fails to meet requirements of the program, a judge can</p>

	<p>immediately impose jail or prison</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Over a 2-year period, BOT San Francisco reports that it reduced recidivism amongst graduates to less than 10 percent (compared to 53 percent for California drug offenders).</li> </ul> <p>BOT reports that it costs \$5,000 per participant. In contrast, the program reports that adjudication costs \$10,000 and prison or jail costs nearly \$50,000 per year.</p> <p>According to the SF DA's office, the program saved the city more than \$1 million per year in jail costs, and close to \$2 million including criminal prosecution costs.</p> <p>The close collaboration between the SF DA's office and other partners was key to the success of this alternative. Also, the focus on non-violent first-time offenders was useful to gain support through the media and politicians. The ability of the program to demonstrate dramatic savings seemed important to its replication in other districts.</p>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bureau of Justice Fact Sheet. Jacquelyn Rivers (BJA) and Lenore Anderson (San Francisco DA's Office). Back on Track: A Problem-Solving Reentry Court. <a href="http://pointsofentrydotorg.files.wordpress.com/2011/11/backontrackfs1.pdf">http://pointsofentrydotorg.files.wordpress.com/2011/11/backontrackfs1.pdf</a></li> <li>- News Article. Kamala D. Harris (SF DA). Finding the Path Back on Track. <a href="http://www.huffingtonpost.com/kamala-d-harris/finding-the-path-back-on_b_350679.html">http://www.huffingtonpost.com/kamala-d-harris/finding-the-path-back-on_b_350679.html</a></li> <li>- Research Report. The Urban Institute. The Choice is Yours: Early Implementation of a Diversion Program for Felony Offenders. <a href="http://www.urban.org/UploadedPDF/412919-The-Choice-is-Yours.pdf">http://www.urban.org/UploadedPDF/412919-The-Choice-is-Yours.pdf</a></li> </ul>

### 30. Conviction and Sentence Alternatives

<b>Conviction and Center Alternatives (CASA)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	United States. State of California. Los Angeles, Riverside, and Santa Ana. 2012
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Post procesal. CASA is a post-guilty plea diversion program that is approved and supervised by a judge. CASA is a post-conviction alternative.</li> <li>- CASA is a program established through collaboration by the US District Court, US Pretrial Services Agency, US Attorney's Office, and Federal Public Defender's Office.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- The objective is to allow select federal defendants rehabilitative services in lieu of incarceration.</li> <li>- CASA targets non-violent low level offenders. CASA participants also include minor traffickers, but that is not the primary focus of the program. One of the three main categories of eligible charges is for narcotics offense. Candidates fall into two tracks: track 1 is for individuals with minimal criminal histories whose crime "appears to be an aberration," while track 2 specifically addresses "criminal conduct primarily motivated by substance abuse." It also serves traffickers, including some larger charges.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CASA is that it is a program operating on the federal level. Participants are identified by the CASA program team and must be approved by the presiding judge. The case is transferred to a judge overseeing the CASA program where the defendant enters a guilty plea. They are then subject to intensive pretrial services supervision which includes meetings with the CASA program team as well as participation in programs designed by the CASA team. Participation lasts between 12 and 24 months. The CASA team determines successful completion of the program. Successful participants have their charges dismissed or a reduced sentence with no imprisonment. Participants who fail are sentenced on their guilty plea.</li> <li>- CASA is a 24 month pilot program that has not completed its course. Anecdotal evidence suggests that the program has been effective for the 50 participants that have been selected.</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- CASA Program Overview. Federal Defenders. <a href="http://federaldefendersny.org/pdfs/CASA%20Program%20Overview,%202012.06.01.pdf">http://federaldefendersny.org/pdfs/CASA%20Program%20Overview,%202012.06.01.pdf</a></li> </ul>

### 31. Reforma artículo 77 para mujeres

<b>Reforma artículo 77 –mujeres</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Costa Rica 2013
<b>Tipo de alternativa</b>	Procesal Reforma legal
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	- Establecer una pena más baja para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad que hubieran ingresado drogas a las cárceles, generando una sanción más proporcional y permitiendo su acceso a medidas sustitutivas de la prisión. - Introducir perspectiva de género y tomar en consideración condiciones específicas de vulnerabilidad a la hora de juzgar y/o dar tratamiento judicial a los casos por infracción al artículo 77 bis <sup>6</sup> de la ley de psicotrópicos.
<b>Descripción general</b>	Consiste en una reforma legislativa que permite la reducción de la pena prevista para el delito establecido en el artículo 77 de la Ley de Psicotrópicos, específicamente para las mujeres que cometan el delito de ingresar drogas a la cárcel y cumplan con ciertas condiciones de vulnerabilidad. Esta reducción permite que el juez pueda disponer para estas mujeres de sustitutos a la privación de la libertad intramural. La reforma legislativa surge como respuesta a una doble constatación. Por un lado, que en el 99% de los casos de introducción de drogas a centros de reclusión eran mujeres en condiciones de vulnerabilidad quienes cometían el delito. Por el otro, que la pena prevista para este delito (de 8 a 20 años), no le permitía a los jueces tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad, ni atenuar las penas. A partir de la reforma, los jueces pueden imponer una pena de entre 3 y 8 años, y esto les permite además establecer medidas alternativas

<sup>6</sup> **Del contenido de la reforma del 77 Bis de la Ley de Psicotrópicos costarricense:**

Con la Ley 9161 se introdujo a la normativa penal el artículo 77 bis de la Ley de Psicotrópicos:

“Artículo 77 bis: La pena prevista en el artículo anterior será de 3 a 8 años de prisión cuando una mujer sea autora o participe en la introducción en establecimientos penitenciarios de sustancias tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y cumpla una o varias de las siguientes condiciones:

- a) Se encuentre en condición de pobreza.
- b) Sea jefa de hogar en condición de vulnerabilidad.
- c) Tenga bajo su cargo personas menores de edad, adultas mayores, o personas con cualquier tipo de discapacidad que amerite la dependencia de la persona que la tiene a su cargo.
- d) Sea una persona adulta mayor en condiciones de vulnerabilidad.

En caso de que se determinen alguna de las condiciones anteriores, el juez competente o el juez de ejecución de la pena podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta, en modalidad de detención domiciliaria, libertad asistida, centros de confianza, libertad restringida con dispositivos electrónicos no estigmatizantes o cualquier tipo de medida alternativa a la prisión.”

	<p>a la prisión, como la detención domiciliaria y la libertad asistida. Una vez aprobada la reforma, el Juez de Ejecución de la Pena se trasladó al Centro Penal el Buen Pastor para realizar las audiencias masivas. La Sala III tramitó en tiempo record las revisiones de sentencia que se presentaron logrando reducir las penas que se habían impuesto en el marco de la ley anterior.</p> <p>Con solo la entrada en vigencia, 145 mujeres egresaron del centro penal el Buen Pastor logrando reunir las con sus familias. El 90% eran mujeres madres de familia, jefas de hogar. Pendiente lograr generar acompañamiento interinstitucional para romper ciclos de pobreza.</p>
<b>Bibliografía relevante</b>	

### 32. Aboriginal Restorative Justice Project

<b>Aboriginal Restorative Justice Project</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Onashowewin, Winnipeg, Manitoba (Canada)
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesal y Post procesal</li> <li>- Programa administrativo (The program was started through the Community-Based Justice Fund, a component of the Aboriginal Justice Strategy by the Canadian Department of Justice.)</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Main objective: To provide services to urban Aboriginal people who have been in conflict with the law using culturally appropriate techniques to educate, treat and prevent recidivism.</p> <p>Target population: Users (possession) and those who commit nonviolent crimes due to problematic use as well as crimes involving victims</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Clients are predominantly referred by the Crown Attorney's Office (prosecutors). Onashowewin staff then meet with the offender to identify issues that may be contributing to criminal behaviors. Offenders are then provided in-house programs matching their needs or referral to other community programs, services or assessments, including referral to community elders. All offenders must attend a mandatory full day workshop on positive healthy decisions and life choices (Mino-Bimadiziwin) as well as a two hour workshop that addresses addiction issues (One Life). There are numerous other programs and resources available</p> <p>The Aboriginal Restorative Justice Project's use of culturally appropriate programming in combination with restorative justice practices</p> <p>Results: Not available (The program has not been evaluated nor is there much anecdotal evidence available)</p>
<b>Bibliografía relevante</b>	<p>Program Website: <a href="http://www.onashowewin.com/programs.htm">http://www.onashowewin.com/programs.htm</a></p> <p>Aboriginal Justice Strategy Evaluation Final Report. Office of Strategic Planning and Performance Management. November 2011. <a href="http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cp-pm/eval/rep-rap/11/ajssja/ajs-sja.pdf">http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/cp-pm/eval/rep-rap/11/ajssja/ajs-sja.pdf</a></p>

## Algunas alternativas generales de Africa y América Latina

### 33. Servicios comunitarios Uganda

<b>Programa de servicios comunitarios - Uganda</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Uganda (proyecto piloto en 2001 y extensión a todo el país en 2004)
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Post procesal</li> <li>- Reforma legal</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Objetivo: Reducir el hacinamiento carcelario</p> <p>Beneficiarios: Mayores de 18 años que hayan cometido delitos menores punibles con encarcelamiento de no más de 2 años.</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Los servicios comunitarios pueden ser ordenados por cualquier tipo de corte. Sin embargo no hay un criterio común entre los jueces sobre cuáles son delitos menores y cuáles no (lo cual es requisito para otorgar la medida).</p> <p>La remisión de casos elegibles la realizan los oficiales de libertad condicional. Sin embargo, en la práctica es la policía quien lleva a las cortes la información de las personas que cumplen los requisitos. La orden de servicios comunitarios puede constar máximo de 980 horas de servicio comunitario dentro de un plazo de hasta seis meses con un máximo de ocho horas diarias de servicio.</p> <p>El servicio comunitario se cumple principalmente en instituciones públicas y en otras privadas como iglesias o mezquitas.</p> <p>Administración y costos: El servicio comunitario es administrado por el Ministerio de Asuntos Internos a través del Comité Nacional de Servicios Comunitarios integrado por un juez de Alta Corte y con participación de entidades relacionadas con la justicia penal, ONGs y otros ministerios. Estos comités son replicados a su vez en escenarios distritales.</p> <p>El Departamento de Servicio Comunitario tiene un total de 17 técnicos y 10 personas de apoyo como personal que coordina 112 distritos. Para compensar la falta de personal se admiten voluntarios en ciertos distritos. Dicho Departamento tiene un presupuesto anual de 225.000 libras esterlinas.</p> <p>Según informes oficiales, se calcula que las 6.350 órdenes de servicios comunitarios impuestas entre 2008 y 2009 generaron un ahorro de 337.000 libras esterlinas para el gobierno (pues dicho servicio fue prestado en entidades públicas), y de 75.000 libras esterlinas para otras instituciones donde se realizaron dichos servicios.</p>

	<p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el periodo 2008-11 se impusieron 26.000 órdenes de servicio comunitario, de las cuales 3.940 fueron por ser un pícaro y vagabundo ('being a rogue and vagabond'), 3.551 por asalto y 1.747 por ser ociosa y desordenada ('being idle and disorderly').</li> <li>- La posesión de narcóticos generó 654 órdenes.</li> <li>- Entre 2008-9 solo el 4% de las órdenes terminaron en fugas.</li> </ul>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>Penal Reform International (2012). Alternatives to imprisonment in East Africa. Disponible en: <a href="http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2718">http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2718</a></p>



### 34. Libertad condicional y servicios comunitarios- Tanzania

<b>Libertad condicional y servicios comunitarios - Tanzania</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Tanzania (mitad de las regiones continentales. No se aplica en la isla de Zanzibar)
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Post procesal</li> <li>- Reforma legal</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Objetivo: Reducir el hacinamiento carcelario</p> <p>Beneficiarios: personas condenadas por delitos que no estén contenidos en el Acta de Sentencias Mínimas de 1972. Dentro de los delitos no sujetos a este beneficio se encuentra por ejemplo el asalto con violencia.</p> <p>En cualquier caso, en la práctica se suele aplicar principalmente a menores de edad, personas con enfermedad de salud mental y a primeros ofensores.</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Libertad condicional: La orden de libertad condicional: puede imponerse por un periodo de entre 1 y 3 años antes o después del encarcelamiento. Puede ser ordenada por cualquier juez pero no por los delitos contenidos en el Acta de Sentencias Mínimas de 1972.</p> <p>Servicios comunitarios: puede imponerse por un periodo de hasta tres años sin que pueda exceder el tiempo de condena de prisión que la corte hubiera impuesto. Los ofensores elegibles son entrevistados en las cortes, pero no hay suficiente personal para entrevistas a todos los posibles beneficiarios. Como en Kenya, los oficiales de la prisión pueden identificar ofensores elegibles que posteriormente serán considerados por las cortes para ser beneficiarios de la medida de servicios comunitarios. Los servicios comunitarios deben prestarse por cuatro horas diarias durante 5 días a la semana, y la supervisión del cumplimiento de las medidas está a cargo de las entidades donde se ejecutan.</p> <p>Desde 2008 ambos servicios fueron unificados institucionalmente bajo la coordinación del Departamento para la libertad condicional y el servicio comunitario, órgano adscrito al Ministerio de Asunto Internos. Este Departamento cuenta con 160 miembros y cuenta con un presupuesto anual de 177.000 libras esterlinas sin contar los costos salariales. El modelo de servicios comunitarios funciona similar a Kenya, con un comité nacional dirigido por un juez de Alta Corte, 12 comités regionales y 66 comités distritales. Sin embargo, muchos de estos últimos no operan regularmente.</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En octubre de 2011 hubo 748 ofensores beneficiarios de la</li> </ul>

	orden de servicios comunitarios y 103 de libertad condicional. - Más del 90% de las órdenes fue cumplida satisfactoriamente.
<b>Bibliografía relevante</b>	Penal Reform International (2012). Alternatives to imprisonment in East Africa. Disponible en: <a href="http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2718">http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2718</a>

### 35. Libertad condicional – Kenya

<b>Programas de libertad condicional y servicio comunitario - Kenya</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Kenya
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Post procesal</li> <li>- Reforma legal</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<p>Objetivo principal: Reducir el hacinamiento carcelario</p> <p>Beneficiarios de libertad condicional: cualquier persona que haya sido condenada por un delito que no involucre una ofensa capital, pero es más común su aplicación en primeros ofensores, mujeres con niños, jóvenes, enfermos, entre otros.</p> <p>Beneficiarios de servicios comunitarios: cualquier persona que haya sido condenada por un delito cuya pena máxima es de tres años o en los casos en los que el juez determina una pena de hasta tres años de prisión.</p>
<b>Descripción general</b>	<p>Libertad condicional: es decretada por la corte y consiste en la suspensión condicional del castigo mientras la persona es puesta bajo supervisión personal y guía o tratamiento individual. La orden puede durar entre 6 meses y tres años y en caso de no cumplir con las condiciones puede ser revocada. La rehabilitación y supervisión está a cargo del oficial de libertad condicional, quien acude a métodos de trabajo social como el desarrollo de habilidades sociales, la provisión de herramientas industriales, counseling, la provisión de una capital inicial y el acceso a educación formal.</p> <p>Servicios comunitarios: La orden se fija por un periodo de días o meses y se traduce en horas de servicio comunitario siendo dos el mínimo de horas diarias y siete el máximo. Los objetivos perseguidos son i) mantener a los ofensores no peligrosos lejos de la prisión donde son vulnerables a los más peligrosos, ii) castigar al ofensor a través de un trabajo que sirve a la comunidad en donde reside, y iii) rehabilitar al ofensor asegurando sus vínculos familiares y sociales y sus capacidades laborales. Para la solicitud de trabajo comunitario hay oficiales encargados de hacer encuestas en prisión, caso por caso, para encontrar las personas candidatas a beneficiarse y remitir dicha información a la corte. Para la ejecución de la orden, hay un supervisor ubicado en los lugares donde se presta el servicio y que se encarga de verificar el cumplimiento de la misma. Dentro de las labores a realizar se incluye el mantenimiento de vías públicas, la conservación del agua, el mantenimiento de escuelas y hospitales, el cultivo de árboles, entre otros.</p> <p>Tanto la libertad condicional como el servicio comunitario son responsabilidad de la Oficina del Vicepresidente y del Ministro de</p>

	<p>Asuntos Internos, a través del Departamento de la libertad condicional y el pos-cuidado (Probation and After-Care Department). Adicionalmente hay un Comité Nacional de Servicios Comunitarios (National Community Service Order Committee) dirigido por un juez de una Alta Corte y que se encarga de monitorear la implementación del Acta de servicios comunitarios a nivel nacional y local.</p> <p>Resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entre 2005 y 2010 el 97% de órdenes de servicio comunitario fueron cumplidas satisfactoriamente; y el 86% de las órdenes de libertad condicional en el 2010 fueron cumplidas satisfactoriamente.</li> <li>- Entre 2005 y 2010 ha habido una caída en el número de reportes de casos elegibles para servicio comunitario o libertad condicional, al igual que el número de órdenes efectivamente realizadas. El número de órdenes de libertad condicional en 2010 fue de 8.770 y de servicios comunitarios fue de 43.045.</li> </ul>
<p><b>Bibliografía relevante</b></p>	<p>Informe "Alternatives to imprisonment in East Africa". (2002). Disponible en: <a href="http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2718">http://www.cicad.oas.org/apps/Document.aspx?Id=2718</a></p>

### 36. Condena condicional – Argentina

<b>Ficha resumen (25) - Condena condicional</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Argentina. A nivel Nacional.
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Post procesal: una vez dictada la sentencia.</li> <li>- Fue adoptada por el Congreso desde la sanción del Código Penal de la Nación<sup>7</sup> en abril de 1922, salvo lo que respecta a las reglas de conducta, que se incorporan al Código Penal mediante Ley N° 24.316 en Mayo de 1994<sup>8</sup>.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evitar el encierro de sujetos, que a juzgar por el escaso monto de la pena impuesta carecerían de peligrosidad para la comunidad. Está orientada a detener a los delincuentes primarios y ocasionales en la pendiente del delito, mediante dos condiciones preventivas: i) evitar la realidad carcelaria -manteniendo al condenado en el seno social y familiar- y ii) evitar la recaída en el delito con la amenaza del cumplimiento de la pena.</li> <li>- Los beneficiarios pueden ser personas que hayan cometido delitos menores, los cuales eran considerados inicialmente como aquellos que tenían penas inferiores a dos años, pero a partir de la Ley 23.057 se ampliaron a aquellos cuya condena fuera inferior a tres años. En un comienzo se podía aplicar solamente para los que fueran condenados por primera vez, pero a partir de la ley 21.338 se incluyó la posibilidad de segunda condena condicional, bajo ciertos requisitos.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<p>- Al momento de dictar sentencia el Código Penal le otorga al juez la facultad de dejar en suspenso la ejecución de la pena impuesta al condenado por determinado período de tiempo, fundado en la inconveniencia de aplicarle efectivamente la privación de libertad, so pena de nulidad. En caso de que el juez declare la condicionalidad de la pena, esta solamente entrará a ejecutarse si se produce la comisión de un nuevo delito dentro de los cuatro años siguientes.</p> <p>La posibilidad de una segunda condena condicional debe contener los presupuestos objetivos y subjetivos de su primer otorgamiento y además deberán haber transcurrido diferentes plazos, según se trate de delitos dolosos o culposos. Si al menos uno fue culposo deberán haber transcurrido ocho años como mínimo desde la primera condena firme, si los dos fueron dolosos, el lapso es de diez años. En el caso en que un condenado por segunda vez vuelva a delinque en</p>

<sup>7</sup> Dicho Código de fondo, recibió sanción como Código Penal, el 30 de septiembre de 1921. Fue promulgado como Ley 11.179 el 29 de octubre del mismo año y entró a regir a partir del 30 de abril de 1922.

<sup>8</sup> Dicha ley prevé también la el instituto de la suspensión de juicio a prueba. Las reglas de conducta han de aplicarse a ambos institutos

	<p>un plazo de cuatro años deberá cumplir la pena impuesta en la primera condena y la que corresponde por el segundo delito, según las normas sobre la acumulación de penas.</p> <p>- No se cuenta con información sobre sus resultados.</p>
<b>Bibliografía relevante</b>	<p>- Córdoba, Raúl Alejandro. Encarcelamientos por delitos relacionados con estupefacientes en Argentina. Disponible en: <a href="http://drogasyderecho.org/assets/ss-argentina.pdf">http://drogasyderecho.org/assets/ss-argentina.pdf</a></p>

### 37. Medida de seguridad curativa

<b>Ficha resumen (21) - Medida de seguridad curativa</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Argentina. A nivel nacional
<b>Tipo de alternativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procesal (durante la investigación y juzgamiento) y Post procesal (se deja en suspenso la aplicación de la pena)</li> <li>- Reforma legal adoptada mediante la Ley No. 23.737, artículos 14 parágrafo 2, 17, 18, 19, 20 y 22.</li> </ul>
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se busca la readaptación social por medio del tratamiento de desintoxicación y rehabilitación de los usuarios de drogas. Dependiendo del momento procesal en que se aplique, si el tratamiento resulta satisfactorio el usuario puede quedar exento de la aplicación de la pena o darse el sobreseimiento definitivo del proceso.</li> <li>- Usuarios que hayan sido judicializados por tenencia para consumo personal y que logren acreditar la dependencia física o psíquica a los estupefacientes.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<p>- Los jueces tienen la facultad de ordenar el tratamiento en dos escenarios distintos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Una vez declara la culpabilidad del autor, el juez deja en suspenso la aplicación de la pena y se somete al autor a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación. Cuando el tratamiento se aplicare al condenado su ejecución será previa, computándose el tiempo de duración de la misma para el cumplimiento de la pena. De acreditar el juez su resultado satisfactorio, se lo eximirá de la aplicación de la pena, en caso contrario, el juez deberá:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aplicar la pena original y además continuar con la medida de seguridad por el tiempo necesario para la desintoxicación y rehabilitación, o</li> <li>b. Solo continuar con la medida de seguridad por el tiempo necesario para la desintoxicación y rehabilitación.</li> </ol> </li> <li>2. Durante el sumario caso en el cual, por encontrarse todavía en el proceso, el grado de acreditación de la dependencia es menor. Basta con que se acredite por semiplena prueba que la tenencia de los estupefacientes era para consumo personal y que existan indicios suficientes, a criterio del juez, de la responsabilidad del procesado y la dependencia física o psíquica. En este caso es necesario el consentimiento por parte del procesado para la aplicación del tratamiento. La consecuencia inmediata de la decisión es se suspende el trámite del sumario y por el tiempo de tratamiento, se suspende la prescripción de la acción penal. Si el juez acredita un resultado satisfactorio, dictará el sobreseimiento definitivo. <i>A contrario sensu</i> se reanudara el trámite de la causa y, en su caso, podrá aplicársele la pena y continuar el tratamiento por el tiempo necesario, o mantener</li> </ol>

	<p>solamente la medida de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- El hecho de que la fijación de las medidas por parte del juez es facultativa y que no exista un criterio unívoco para su aplicación, dificulta la evaluación de los resultados.</li></ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Registro Nacional de Instituciones <a href="http://www.sedronar.gob.ar/a/263/15089/registro-nacional-de-instituciones.html">http://www.sedronar.gob.ar/a/263/15089/registro-nacional-de-instituciones.html</a></li></ul>



### 38. Casa de salud con Inclusión Social (SIS)

<b>Ficha resumen (24) - Casa Salud con Inclusión Social (SIS)</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Argentina. Nivel Nacional
<b>Tipo de alternativa</b>	Post procesal, una vez que cesa la medida de seguridad y el usuario se encuentra extramuros Programa administrativa impulsado por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones (DNSMyA) junto a otras reparticiones del Estado nacional.
<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brindar espacios y herramientas de contención e inclusión social a personas que salen del servicio penitenciario federal través de la realización de actividades en un espacio físico comunitario de inclusión social que es la Casa Sis.</li> <li>- Personas con padecimientos cuya salud mental se encuentra comprometida que son egresados del Servicio Penitenciario Federal –por cumplimiento de condena o por desprocesamiento.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es un modelo comunitario de inclusión social en el que se recibe a egresados del servicio penitenciario federal y se los incorpora a las actividades de la casa que se desarrollan diariamente de lunes a viernes 10 a 18 Hs. Desde Casa Sis se brinda acompañamiento y se articula con distintos organismos públicos. La Casa cuenta con Talleres socioproductivos, Talleres de Lectura, Convivencia, Arte, etc. Así mismo se articula con los equipos terapéuticos tratantes de los distintos usuarios. La Casa se presenta regularmente en eventos que permiten difundir las realizaciones de los distintos Talleres y actividades de los usuarios del Dispositivo.</li> <li>- No hay evaluaciones sobre su implementación</li> </ul>
<b>Bibliografía relevante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="http://www.msal.gov.ar/saludmental/index.php/recursos-de-comunicacion/archivo-de-noticias/242-casa-sis-salud-con-inclusion-social">http://www.msal.gov.ar/saludmental/index.php/recursos-de-comunicacion/archivo-de-noticias/242-casa-sis-salud-con-inclusion-social</a></li> <li>- <a href="http://www.msal.gov.ar/saludmental/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=322:casa-sis-hincho-por-argentina-a-pura-emocion&amp;catid=4:destacados-slide322">http://www.msal.gov.ar/saludmental/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=322:casa-sis-hincho-por-argentina-a-pura-emocion&amp;catid=4:destacados-slide322</a></li> </ul>

### 39. Medida de seguridad educativa

<b>Medida de seguridad educativa</b>	
<b>Lugar de implementación</b>	Argentina. A nivel nacional
<b>Tipo de alternativa</b>	Post procesal Legal. Ley 23.737 arts. 14 segunda parte, 21 y 22.

<b>Principales objetivos y beneficiarios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Busca la readaptación social mediante la creación de conciencia en el usuario respecto del comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes.</li> <li>- El programa está dirigido a usuarios que no dependen física o psíquicamente de estupefacientes por tratarse de un principiante o experimentador.</li> </ul>
<b>Descripción general</b>	<p>Se trata de una medida por medio de la cual, al momento de dictar sentencia, el juez puede sustituir la pena por un programa especializado de carácter obligatorio que: i) Tenga como eje el comportamiento responsable frente al uso y tenencia indebida de estupefacientes, ii) Tenga una duración mínima de tres (3) meses y iii) Sea implementado por la autoridad educativa nacional o provincial. Los casos para los que aplica el programa son solo los de tenencia para consumo personal, en los que el procesado debe ser un principiante o experimentador y no debe depender física ni psíquicamente de estupefacientes. La sustitución se comunicará al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, donde se dejará constancia del uso y tenencia indebida de estupefacientes. Si pasados tres (3) años desde la finalización del lapso de la medida de seguridad educativa el juez acredita un resultado satisfactorio (para cuya valuación tendrá en consideración que la persona alcance una reinserción social plena, familiar, laboral y educativa), previo dictamen de peritos, podrá librar oficio al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria para la supresión de la anotación relativa al uso y tenencia indebida de estupefacientes. A contrario sensu, si concluido el tiempo de tratamiento éste no hubiese dado resultado satisfactorio por la falta de colaboración del condenado, el tribunal hará cumplir la pena en la forma fijada en la sentencia.</p> <p>- No existe un criterio unívoco para su aplicación, lo cual dificulta la evaluación de los resultados. En términos generales, el porcentaje de aplicación de esta medida es inferior a la establecida en el art. 18 de la misma ley (medida de seguridad curativa). Su aplicación era discrecional a los jueces quienes no la utilizaron ampliamente.</p>
<b>Bibliografía relevante</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ministerio de Cultura y Educación. Centro de la medida de la seguridad educativa. Artículo 21 – Ley 23.737/89. Disponible en: <a href="http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/95233/EL000251.pdf?sequence=1">http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/95233/EL000251.pdf?sequence=1</a></li> </ul>

<b>Lugar de implementación</b>	
<b>Tipo de alternativa</b>	
<b>Principales</b>	

<b>objetivos y beneficiarios</b>	
<b>Descripción general</b>	
<b>Bibliografía relevante</b>	